

SEPTIEMBRE 13 DE 1932

59ª REUNION — 39ª SESION ORDINARIA

PRESIDENCIA DE LOS DOCTORES JUAN F. CAFFERATA, AUGUSTO BUNGE y ABRAHAM
DE LA VEGA

DIPUTADOS PRESENTES: Abalos Próspero, Acosta Abel, Agüero Santos, Aguirrezabala Miguel A., Ahumada Luis Alberto, Alonso Alfredo J., Amoedo Aurelio F., Andreis Fernando de, Antelo Mario, Aráoz Ernesto M., Aráoz José Ignacio, Argonz Joaquín, Bermúdez Manuel A., Bessano Domingo, Biancifiore Rafael, Bgoliolo Rómulo, Bordabehere Enzo, Briuolo Miguel, Bruchou Eduardo, Bunge Augusto, Bustillo José M., Buyán Marcelino, Cafferata Juan F., Calderón Osvaldo M., Cárcano Miguel Angel, Carreras José, Carreras Ernesto L. de las, Castellanos José D., Castiglioni Eduardo, Castiñeiras Alejandro, Castro Felipe, Contte José A., Cornejo Arias Víctor, Coronel Carlos, Cortés Arteaga Alberto, Costa Méndez Nicanor, Costanti, Gerardo, Courel Carlos D., Da Rocha Arturo, Dávila Miguel B., Dickmann Adolfo, Dickmann Enrique, Duhau Luis, Escobar Adrián C., Espil Alberto, Fernández Damián, Ferreira Antenor R., Fresco Manuel A., Frías Silva Raúl, Ganza Marcelino, Ghioldi Américo, Giménez Angel M., Giusti Roberto F., Godoy Raúl, Gómez Hernán E., González Benjamín S., González Guerrico Manuel, González Maseda Manuel, González Valentín, Groppo Pedro, Gugliamelli Aquiles M., Herráiz Pascual, Inda Rufino, Iribarne Alberto, Lamesa Juan B., Lazo Plácido C., Lima Vicente Solano, López Héctor S., Loredo José, Loyarte Ramón G., Luján Abdón P., Maglione Francisco L., Magris Amleto, Manacorda Carlos, Mancini Rafael, Martella Julio C., Martínez Erasmo, Martínez José Heriberto, Mattos Luis María, Mayo Ramón, Messone Ricardo N., Molina Serapio, Moreira Alejandro E., Moret Carlos (h.), Morrough Bernard Juan F., Mouchet Enrique, Navello Miguel B., Nigro Juan, Noble Julio A., Noble Roberto J., Oddone Jacinto, Ortiz Basualdo Samuel, Palacín José, Palacín Manuel, Palacín Pedro, Palacio Benjamín, Palisa Mujica Arturo, Palmeiro José, Parera Gregorio, Parodi Misael J., Pascarelli Miguel, Pena José Luis, Pereira Clodomiro, Pérez Leirós Francisco, Pfleger José E., Pietranera Burno J., Pinedo Federico, Pintos Angel, Pomponio Vicente E., Pressacco Juan P., Quiroga Félix, Radio Pedro, Repetto Nicolás, Rojas Marcos E., Ruggieri Silvio L., Ruiz Guíñazú Jacinto, Salas José Raquel, Salcedo Saturnino, Santillán Enrique, Schoo Lastra Dionisio, Sellarés Avelino, Sierra Bernardo, Simón Padrós Juan, Solari Juan Antonio, Solís Rogelio J., Speroni Daniel C., Spinetto Alfredo L., Taboada Mora Cipriano, Tourrés León P., Uriburu Francisco, Vega Abraham de la, Viechi Adolfo A., Vidal Baigorri José, Vionnet Rodolfo L., Zarazaga Marcial J., Zerda Justiniano de la; AUMENTES CON LICENCIA: Amadeo y Videla Daniel, Buira Demetrio, Carús Agustín J., Corominas Segura Rodolfo, Grisolia Luis, Mosset Iturraspe Mario, Pueyrredón Carlos A., Vignart Uberto F.; CON AVISO: Becerra Eugenio A. (h.), Garayalde José María, Rodríguez Pinto Domingo, Zalazar Altamira Benjamín; SIN AVISO: Albarracín Belisario, Bosano Ansaldo Daniel, Colombres Carlos G., Harispe Albino H., Herrera Bruno J., Mouesca Eduardo, Moyano Rodolfo, Sagger Angel.

SUMARIO

- 1.—Manifestaciones en minoría.
- 2.—Sesión en mayoría. Acta.
- 3.—Asuntos entrados.

- I.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre terminación del ferrocarril trasandino de Salta a Socompa.
- II.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre plan de obras y adquisiciones de los Ferrocarriles del Estado.
- III.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo aprobando una

inversión de \$ 8.180.301,90 m/n. efectuada por los Ferrocarriles del Estado y abriendo un crédito suplementario con destino a la misma repartición.

- IV.—Comunicaciones oficiales varias.
- V.—Despachos de comisión.
- VI.—Peticiones particulares.

- 4.—Indicación del señor diputado Giusti para que se inserte en el Diario de Sesiones una nota de la Asociación Nacional del Profesorado.

- 5.—Asuntos entrados:

- VII.—Peticiones particulares.

- VIII.—Proyecto de ley del señor diputado Coronel sobre reconocimiento de servicios provinciales y municipales prestados por maestros o profesores de educación pública.
- IX.—Proyecto de ley del señor diputado Coronel sobre trazado de una línea de los Ferrocarriles del Estado desde la estación Termas (Río Hondo) a la ciudad de Santiago del Estero.
- X.—Proyecto de ley del señor diputado Escobar sobre ciudadanía y naturalización.
- XI.—Proyecto de ley del señor diputado Loyarte y otros, sobre creación del Departamento Nacional de Ecología y Genética Aplicadas.
- XII.—Proyecto de ley del señor diputado Martínez (J. H.), reproducido, acordando pensión a la señora Celina Panthou de Onelli.
- XIII.—Proyecto de ley del señor diputado Calderón sobre fijación de impuesto a la exportación de lino.
- XIV.—Proyecto de ley de los señores diputados González (B. S.) y Gómez sobre construcción de hospitales en la provincia de Corrientes.
- XV.—Consulta de la Presidencia de la Honorable Cámara sobre embargabilidad de las dietas de los señores diputados.
- 6.—Concédese licencia para faltar a sesiones a los señores diputados Pueyrredón, Grisolia, Buira y Mosset Iturraspe.
- 7.—Moción del señor diputado Contte fijando día para considerar el proyecto de ley sobre intervención federal a la provincia de Corrientes. Es retirada y se aprueba una moción del señor diputado Pinedo recomendando a la Comisión de Negocios Constitucionales el preferente despacho del asunto.
- 8.—Moción del señor diputado Escobar para que se envíe un telegrama a la Cámara de Diputados del Uruguay con motivo de la reanudación de las relaciones diplomáticas.
- 9.—A moción de los señores diputados Vicchi y Pérez Leirós, se resuelve terminar la consideración del despacho de la Comisión de Legislación General sobre reformas al Código de Comercio y se fija nueva fecha para considerar la interpelación al señor ministro del interior sobre cumplimiento de las leyes del trabajo.
- 10.—Incidencia promovida por el señor diputado Solari, relacionada con varias denuncias formuladas contra las autoridades de San Juan.
- 11.—Indicación del señor diputado Moret para que se inserte en el Diario de Sesiones una nota de la Confederación General del Trabajo.
- 12.—Moción del señor diputado Uriburu acordando preferencia al despacho de la Comisión de Negocios Extranjeros y Culto en el proyecto de declaración sobre reanudación de relaciones comerciales con Rusia.
- 13.—Integración de comisión.
- 14.—Información solicitada por el señor diputado Radio.
- 15.—Continúa la consideración del despacho de la Comisión de Legislación General sobre reformas al Código de Comercio, en lo relativo a empleados de comercio.

—En Buenos Aires, a trece de Septiembre de 1932, siendo la hora 15 y 30:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Presidente (Cafferata). — Señores diputados: es la hora reglamentaria y hay 55 señores diputados en el recinto y 88 en la casa.

Sr. Giménez. — Se podría esperar.

Sr. Presidente (Cafferata). — Si hay asentimiento, se esperará un cuarto de hora.

—Asentimiento.

pronto llegaría la solución por todos anhelada.

Por eso, el Congreso del Uruguay, a los pocos días de planteada la incidencia, sancionaba una ley ordenando la erección de un monumento como un homenaje a la República Argentina por su contribución a la independencia de América y de la República del Uruguay; y al mismo tiempo ordenaba la construcción de una escuela en Ayui, provincia de Entre Ríos, con la inscripción «El Pueblo Oriental a la República Argentina». Por nuestra parte, enviábamos embajadores intelectuales sin credenciales para que expresaran en aquel pueblo cuán grande es la amistad que nos liga.

Nuestro Congreso, en sus dos ramas, ha guardado una prudente expectativa, dejando librada la solución del asunto a la serena actitud de nuestro Poder Ejecutivo y es justo reconocer que ha dado cumplida ejecución a los deseos de los dos pueblos hermanos.

Existe en la mesa de la Cámara un telegrama enviado por el presidente de la Cámara de Diputados del Uruguay, que por razones obvias no fué contestado en su oportunidad. En él se hace referencia a la política internacional seguida por la República Argentina y por el Uruguay con motivo del conflicto entre el Paraguay y Bolivia. Creo que ha llegado el momento de que ese telegrama sea contestado por la Presidencia de la Cámara en términos de concordancia con los principios de política internacional expresados en dicho telegrama. Y propongo, además, que en la respuesta se exprese que hemos recibido con gran satisfacción la noticia feliz de haberse reanudado las relaciones diplomáticas, dando así un alto ejemplo de cordura, de solidaridad y de amistad americana. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Giménez. — Pido la palabra.

Me asocio en un voto a las manifestaciones del señor diputado Escobar, porque ellas interpretan sentimientos que comparten todos los argentinos.

Tuve oportunidad de encontrarme en Montevideo, como delegado del comité

de mi partido, en una gran asamblea popular de confraternidad que se realizó en la plaza Libertad y pude ver el espíritu y el sentimiento por encima de la diplomacia equivocada y los rencores de una política subalterna, que había en ese pueblo vinculado por tradición y por los mismos ideales a la República Argentina.

Que este episodio tan desagradable marque una nueva época para la diplomacia americana y lejos de los agravios y de las pasiones borremos el espíritu de frontera y pensemos en nuestros hermanos uruguayos que, en el pasado como en el presente, han vivido y luchado como nosotros y con nosotros por la libertad.

Los socialistas que tenemos allí compañeros nuestros, con los mismos ideales y los mismos propósitos de justicia social que simboliza nuestra amplia bandera de redención, vemos con satisfacción que haya terminado este episodio en forma tan favorable y pacífica.

Sr. Presidente (Cafferata). — La Presidencia entiende que hay unanimidad de la Cámara respecto de la proposición formulada por el señor diputado por Buenos Aires doctor Escobar.

9

ORDEN DE LA LABOR

Sr. Vicchi. — Pido la palabra.

En una de las sesiones anteriores formulé moción para que el despacho número 35 se tratara en la sesión del viernes. Por causa ajena a la voluntad de la Cámara no fué posible considerarlo en esa oportunidad.

La postergación ha sido, sin embargo, beneficiosa para los propósitos que se perseguían, porque los representantes de los distintos sectores han podido puntualizar en la comisión los motivos de discrepancia que han sido contemplados y aceptados en gran parte por ella, de manera que el debate se concretará exclusivamente a dos puntos donde no ha habido posibilidad de llegar a un acuerdo.

Como es útil que la ley se sancione y como se ha dejado ya de lado todo peligro de que las reformas propuestas en el recinto puedan destruir su coordinación, hago indicación de que se trate como primer asunto en la sesión de hoy; sin querer impedir, desde luego, que haga uso de la palabra el señor diputado Solari, que la ha solicitado.

Sr. Dickmann (A.). — Pido la palabra.

Sr. Vicchi. — Después de ese asunto y en la sesión de hoy propongo se trate el aludido despacho.

Sr. Presidente (Cafferata). — La Presidencia informa a los señores diputados que reglamentariamente corresponde que la Cámara trate, como primer asunto, el que ha mencionado el señor diputado por Mendoza, pues el señor ministro del interior ha mandado una nota en que expresa que no podrá concurrir a contestar la interpelación señalada para hoy.

Sr. Vicchi. — Ignoraba esa circunstancia.

Sr. Presidente (Cafferata). — Se va a dar lectura de la nota.

—Se lee:

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1932.

A la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

El Poder Ejecutivo se dirige a vuestra honorabilidad en respuesta a la comunicación de fecha 7 del corriente por la cual se invitaba al ministro del interior a concurrir a la sesión del día de hoy para informar «acerca del cumplimiento de las leyes del trabajo».

La fórmula tan amplia y general votada para el pedido de informes determinó a solicitar privadamente una aclaración indicativa de las leyes a que especialmente él se refería a fin de reunir los datos y antecedentes pertinentes, y la aclaración ha tenido como resultado la especificación de que comprende cinco leyes o sean las números 4.661, 11.278, 11.317, 11.338 y 11.544.

Siendo ésta la extensión del pedido de informes y como se trata de hechos y la investi-

gación que exige tiene que realizarse en los expedientes y actas que obran en el Departamento Nacional del Trabajo instruídos por cada denuncia de infracción, actas que por mes exceden de medio millar, resulta imposible efectuar una investigación completa y prolija en tres días hábiles, no obstante el empeño y labor que a ella se aplique.

Es de agregar que en lo relativo al trabajo en el territorio de Misiones, a lo que también se ha aludido, la vigilancia con respecto a la manera en que se cumplen las leyes se ejerce por intermedio de la gobernación, de modo que los datos el Poder Ejecutivo tiene que recabarlos de la misma, lo que por sí excluye que puedan llegar en el angustioso término de tres días.

Queda con lo expuesto explicada la no concurrencia del ministro del interior a la sesión a realizarse en el día de la fecha, Secretario de Estado que en estos últimos días ha estado presente en las sesiones y en las comisiones durante prolongadas horas compartiendo la labor del Honorable Congreso.

El Poder Ejecutivo se complace en manifestar que tan pronto como termine la investigación y compulsa previa para reunirlos se enviarán todos los antecedentes.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

AGUSTÍN P. JUSTO.

Leopoldo Melo.

Sr. Dickmann (A.). — Pido la palabra.

En realidad, señor presidente, están en discusión al mismo tiempo dos cosas: la moción que acaba de formular el señor diputado por Mendoza y la comunicación que hace el señor ministro del interior relativa al pedido de postergación para otra oportunidad de la interpelación que fué votada en la sesión pasada. Me voy a ocupar de la moción del señor diputado por Mendoza, y me felicito de haber constatado — lo que para mí era ya evidente — que su indicación de postergación no respondía sino al propósito de colaborar a la mejor sanción de la ley que está a consideración de esa Cámara. Y como faltan pocas sesiones ordinarias y como están ya señaladas algunas de ellas para tratar asuntos que van a re-

querir una atención muy preferente de la Honorable Cámara y cuyo debate va a ser tal vez extenso, me permitiría invitar al señor diputado a que completara su indicación con esta otra: que se trate en la sesión de hoy, en sesión permanente y hasta terminar.

No indico desde luego el procedimiento de mantener la casa cerrada porque no está en nuestros hábitos ni creemos que sea conveniente sancionar leyes de esta naturaleza en esa forma, pero sí requiero el compromiso moral de los señores diputados de permanecer hoy en el recinto hasta sancionar la ley, y así quedará expedito el camino para considerar mañana el asunto cuya preferencia se ha votado.

Sr. Vicchi. — Acepto la indicación, porque era ese justamente mi propósito: tratar el asunto en la sesión de hoy hasta terminarlo. Creo que el debate será breve.

Sr. Presidente (Cafferata). — La Presidencia entiende que hay asentimiento. ¿El señor diputado por la Capital desea que se ponga a votación la moción que ha formulado?

Sr. Dickmann (A.). — No, señor presidente. Creo que hay asentimiento.

Sr. Presidente (Cafferata). — El señor diputado Solari había solicitado la palabra.

Sr. Solari. — Se la cedo al señor diputado Pérez Leirós, que va a referirse a la nota del señor ministro del interior.

Sr. Presidente (Cafferata). — Tiene la palabra el señor diputado Pérez Leirós.

Sr. Pérez Leirós. — No se me oculta, señor presidente, que el señor ministro del interior tiene el propósito de munirse de una información amplia para contestar el pedido de informes que se le ha formulado y que será la suya una información seria y útil para la Honorable Cámara. Por esta razón, propongo que el pedido de informes se trate con la presencia del señor ministro en la sesión del miércoles 21 del corriente.

Sr. Solari. — Pido la palabra.

Acepto, desde luego, la indicación que formula mi colega el diputado Pé-

rez Leirós, pero me permito hacer notar a la Cámara la siguiente circunstancia: La Cámara resolvió favorablemente un proyecto de interpelación al señor ministro del interior sobre cumplimiento de las leyes sociales, del trabajo. A través de la lectura de la nota del señor ministro, resultaría que este secretario de Estado, sin duda muy ocupado en sus tareas de gobierno y cuya colaboración ha tenido la Cámara recientemente, estuviera dispuesto al envío simple de antecedentes que espera reunir, es decir, que la interpelación quedaría reducida a un informe por escrito. El señor diputado Pérez Leirós — y yo, en la parte que corresponde a la cuestión que planteé a raíz de la interpelación — deseamos que el señor ministro concurra a la Cámara. Eso no quiere decir que nosotros coloquemos al señor ministro en la situación de abandonar sus tareas para abocarse en la Cámara, en términos perentorios, a la consideración de estos asuntos, pero el espíritu de la resolución anterior de la Cámara fué votar una interpelación y no un pedido de informes por escrito. Los señores diputados han de comprender que, para estudiar el cumplimiento de las leyes del trabajo con el carácter general y permanente que ha indicado el señor diputado Pérez Leirós, es indispensable la presencia del señor ministro. De lo contrario, vamos a contestar a informes por escrito sin obtener respuesta; y como no es una polémica violenta con el ministro lo que deseamos ni un match verbal, sino colaborar en el mejor cumplimiento de leyes que afectan a millares de argentinos, deseáramos que el señor ministro tuviera en cuenta el espíritu de la resolución de la Cámara y se hiciera presente en el recinto.

Sr. Presidente (Cafferata). — Se va a votar la moción del señor diputado por la Capital, de fijar el miércoles 21 para que concurra el señor ministro del interior.

Sr. Aguirrezabala. — Pido la palabra.

Creo que la Cámara tiene para el 20 ya designada una preferencia, que se

relaciona con un asunto que por su naturaleza no ha de quedar terminado en esa sesión, como es el de divorcio.

La intromisión — que estimo ha pasado inadvertida al señor diputado — de esta interpelación, va a significar en la práctica, y es bueno que nos anticipemos a lo que va a ocurrir, la interrupción de un asunto importante para pasar a otro, con lo cual tal vez malogremos los dos asuntos.

Hago esta advertencia, porque, seguramente, el señor diputado la ha de recoger y modificará su indicación en forma tal que permita que en la sesión del 20 se comience a tratar el asunto del divorcio y se siga tratando en las sesiones siguientes, sin perjuicio de que en otra oportunidad tratemos esa interpelación.

Sr. Pérez Leirós. — Pido la palabra.

Es evidente que el pedido de informes formulado se ha presentado con propósitos serios y obedece a razones fundamentales, y, que hemos también querido dar tiempo suficiente al Poder Ejecutivo para hacer cumplir las leyes del trabajo.

No se me oculta que el propósito del señor diputado es el de que la Cámara trate un asunto de la mayor importancia, como es el divorcio, que tiene fijado el día 20 de este mes para su consideración, por lo cual, como una deferencia a las manifestaciones que se han hecho, no tengo inconveniente en postergar el pedido de informes para el día 23 y siguientes, dado que considero que en tres días hay tiempo suficiente para tratar el proyecto sobre divorcio, que con ser de una importancia tan fundamental, no lo es más que el incumplimiento de ocho leyes del trabajo que afectan a centenares de miles de obreros.

Sr. Aguirrezabala. — No discuto cuál es más importante, sino que me limito a advertir que para ese día se había destinado ya una preferencia.

Sr. Presidente (Cafferata). — Se va a votar si se designa el día 23 y siguientes, de este mes, para tratar la interpelación a que se ha referido el señor diputado.

— Resulta afirmativa.

10

INCIDENCIA

Sr. Presidente (Cafferata). — El señor diputado por la Capital había solicitado la palabra.

Sr. Solari. — Decía, señor presidente, que la nota elevada a la Cámara por ex obreros de San Juan, desterrados ahora de esa provincia por el gobierno local, demuestra que son demasiado frecuentes y alarmantes las reclamaciones que llegan a esta Honorable Cámara sobre la situación de esa provincia.

Yo no deseo hacer ahora, porque no es el instante ni la oportunidad para ello, el proceso de San Juan ni del gobierno que esa provincia tiene; pero es evidente, que allí se realizan actos que afrentan a la dignidad del país, sobre todo en cuanto se refiere a la libertad y al trabajo de los habitantes de ese Estado. Es un proceso que, por lo demás, está haciéndose día a día, con la información copiosa de los diarios, en la conciencia pública.

Pero consideramos necesario, al mismo tiempo que solicitar la publicación de la nota en el Diario de Sesiones para ilustración de los señores diputados en general y del pueblo que lee nuestro órgano oficial, llamar la atención de la Comisión de Negocios Constitucionales, para que, en la medida de lo posible, tome en cuenta los antecedentes que ya le fueron pasados con referencia a la situación de esa provincia.

No sé si la comisión, frente al cúmulo de hechos y de denuncias que obran en su poder, las tomará en consideración y acordará, por ejemplo, como medida previa, visitar esa provincia y estudiar en el terreno los cargos formulados. No es posible, señores diputados, permanecer insensibles ante lo que ha llegado a nuestro conocimiento. Yo he visitado con el señor diputado Antelo, hace aproximadamente mes y medio esa provincia, y declaro, sinceramente, que fui con la mejor voluntad del mundo. No llevaba prevenciones ni odios contra aquel gobierno, ni contra aquella situación po-

nisterios. La Constitución se cumplirá fielmente.

Sr. Presidente (Cafferata). — La Presidencia entiende que está terminado el asunto.

Se pasará a la orden del día número 35.

15

EMPLEADOS DE COMERCIO

Honorable Cámara:

La Comisión de Legislación General ha estudiado los proyectos de ley presentados por los señores diputados Adolfo Dickmann y M. González Maseda y otros, por los cuales se reforman diversos artículos del Código de Comercio relativos a empleados de comercio; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja a vuestra honorabilidad la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Modifícanse los artículos 154, 155, 156, 157, 158, 159 y 160 del Código de Comercio, en la siguiente forma:

«Artículo 154. — Los empleados de comercio — factores, dependientes, viajeros, encargados u obreros que realizan tareas inherentes al comercio — son responsables a sus principales de cualquier daño que causen a sus intereses por malversación, negligencia o falta de exacta ejecución de sus órdenes e instrucciones.

«Art. 155. — Los accidentes y las enfermedades inculpables que interrumpen los servicios del empleado de comercio — factor, dependiente, viajante, encargado u obrero — que trabaja a sueldo, jornal, comisión u otro modo de remuneración, sea en dinero o en especie, alimentos o uso de habitación, no le privarán del derecho a percibir dichas retribuciones hasta tres meses de interrupción si tiene una antigüedad mayor de este último tiempo.

«La retribución mensual que en estos últimos casos corresponde al empleado, se liquidará de acuerdo con el promedio del último semestre.

«El empleado conservará su puesto, y si dentro del año transcurrido después de los

plazos de tres y seis meses indicados el principal lo declarase cesante, éste le pagará la indemnización de despido del artículo 157.

«La indemnización por accidente o enfermedad que establece el primer apartado de este artículo, no regirá para los casos previstos en la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, cuando por esta última corresponda al empleado una indemnización mayor.

«El derecho a la retribución en los casos de accidentes o enfermedades inculpables, no excluye el que tiene el empleado o la indemnización por los daños o pérdida que sufra durante el servicio que presta al principal y que estará a cargo de éste.

«En ningún caso el empleado tendrá derecho a más de una indemnización por su accidente o enfermedad.

«También conservará el empleado su puesto cuando deba prestar servicio militar por llamado ordinario, movilización o convocatorias especiales.

«Art. 156. — El empleado de comercio — factor, dependiente, viajante, encargado u obrero — gozará de un período mínimo y continuado de descanso anual, conservando la retribución que recibe durante el servicio, liquidada de acuerdo con el artículo anterior, por los siguientes términos:

- a) Diez días, cuando la antigüedad en el servicio no excede de cinco años;
- b) Quince días, cuando siendo mayor de cinco años la antigüedad no excede de diez;
- c) Veinte días, cuando la antigüedad es mayor de diez años y no excede de veinte;
- d) Treinta días, cuando la antigüedad en el servicio es mayor de veinte años.

«Queda reservada al principal la elección de la época en que regirá el período de descanso.

«Art. 157. — El contrato de empleo no podrá ser disuelto por voluntad de una de las partes sin previo aviso o, en su defecto, indemnización, además de la que corresponderá al empleado por su antigüedad en el servicio, cuando se disuelva por voluntad del principal.

«Esta regla se aplicará también en los casos de cesación o liquidación del negocio que no sean determinados exclusivamente por fuerza mayor.

«El preaviso, cuando una convención de partes no lo fija en un término mayor, deberá darse con la anticipación siguiente:

- a) De un mes, cuando el empleado — factor, dependiente, viajante, encargado u obrero — tiene en el servicio una antigüedad no mayor de cinco años;
- b) De dos meses, cuando el empleado tiene en el servicio una antigüedad mayor de cinco años.

«Estos plazos correrán desde el último día del mes en que se comunica la cesantía. La notificación deberá probarse por escrito.

«Durante el término del preaviso, y sin que se disminuya su sueldo, jornal, comisión u otro modo de remuneración, el empleado gozará de una licencia diaria de dos horas dentro de su jornada normal de trabajo.

«En caso de cesantía sin aviso previo en los plazos señalados, el principal pagará al empleado una indemnización equivalente a la retribución que corresponde al período legal de preaviso.

«También abonará el principal al empleado, en todos los casos de despido, haya o no preaviso, una indemnización no inferior a la mitad de su retribución mensual por cada año de servicio, o fracción mayor de tres meses, tomándose como base de retribución el promedio de los últimos cinco años o de todo el tiempo del servicio cuando es inferior a aquel plazo. Para fijar el promedio se computarán como formando parte de los sueldos y salarios, las comisiones u otra remuneración y todo pago hecho en especie, en provisión de alimentos o en uso de habitación. En ningún caso esta indemnización será inferior a un mes de sueldo ni mayor de quinientos pesos por cada año de servicio.

«La suspensión de tareas por más de tres meses, en el período de un año, ordenada por el principal, se considerará como despido.

«La rebaja injustificada de los sueldos, salarios, comisiones u otros medios de remuneración, no aceptada por los afectados, colocará a éstos en situación de despedidos y con derecho a percibir la compensación que establece este artículo.

«Cuando se produzca la cesión o cambio de firma, o cuando la precedente no haya dado el aviso previo en los plazos ya enunciados, y en los casos de suspensión de tareas o rebaja in-

justificada de las retribuciones, pasarán a la nueva firma las obligaciones que establecen este artículo y los dos anteriores.

«En caso de falencia del principal, el empleado tiene derecho a la indemnización por despido, según antigüedad en el servicio.

«Cuando el contrato de empleo se disuelve por voluntad del empleado, éste deberá preavisar al principal en los mismos plazos de este artículo, y en defecto pagará la indemnización que por falta de preaviso se establece para el empleador.

«Las indemnizaciones por cesantía y por falta de preaviso que corresponden al empleado no están sujetas a moratoria ni a embargo, y regirá a su respecto lo dispuesto para salarios y sueldos en el artículo 4º de la ley 11.278. Estas indemnizaciones gozarán de privilegio general sobre los bienes del deudor.

«A los efectos de la indemnización, la antigüedad en el servicio anterior a la sanción de esta ley, sólo se reconocerá hasta un límite máximo de diez años.

«En caso de muerte del empleado, el cónyuge, los descendientes y los ascendientes, en el orden y en la proporción que establece el Código Civil, tendrán derecho a la indemnización por antigüedad en el servicio, limitándose para los descendientes a los menores de veintidós años y sin término de edad cuando están incapacitados para el trabajo. A falta de esos parientes, serán beneficiarios de la indemnización los hermanos, si al fallecer el empleado vivían bajo su amparo, y dentro de los límites fijados para los descendientes. Se deducirá del monto de la indemnización lo que los beneficiarios reciban de cajas o sociedades de seguros por actos o contratos de previsión realizados por el principal.

«Art. 158. — Será nula y sin valor toda convención de partes que reduzca las obligaciones determinadas en los tres artículos anteriores, las que regirán también para los contratos de empleo a plazo fijo, en cuyo caso el preaviso será un mes, o dos o tres meses antes de la expiración del término convenido, según antigüedad en el servicio; considerándose que acepta la reconducción del contrato la parte que omita el preaviso.

«Cuando vencido el término expresamente estipulado en un contrato, el empleado — factor, dependiente, viajante, encargado u obrero — continúa en el trabajo, por tácita reconducción o por un nuevo contrato, se le

computará el tiempo de servicio anterior para determinar los períodos de licencia anual, el plazo de preaviso o la indemnización equivalente y el monto de la indemnización por antigüedad en el trabajo, de cuyo monto se deducirá lo que ya ha recibido, por el mismo concepto, a la terminación de los precedentes contratos. A los mismos efectos y en el caso de contratos por tiempo indeterminado, se computará el tiempo anterior cuando el empleado despedido reingrese al servicio del principal, deduciéndose de la última indemnización por antigüedad lo recibido en igual concepto por despidos anteriores.

«En caso de cesantía o de retiro voluntario del servicio, por cualquier causa, el principal estará obligado a entregar al empleado un certificado de trabajo, conteniendo las indicaciones sobre su naturaleza y antigüedad en el mismo.

«Art. 159. — Se considera arbitraria la inobservancia del contrato entre el principal y su empleado, siempre que no se funde en injuria que haya hecho el uno a la seguridad, al honor o a los intereses del otro o de su familia.

«Esta calificación se hará prudencialmente por el tribunal o juez competente, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que median entre los superiores e inferiores.

«Art. 160. — Son causas especiales para despedir al empleado, y sin obligación para el principal de indemnizar por despido y por falta de preaviso, aunque exista contrato por tiempo determinado:

- 1º Los hechos previstos en el artículo 154 y todo acto de fraude o de abuso de confianza, establecidos por sentencia judicial;
- 2º Incapacidad para desempeñar los deberes y obligaciones a que se sometieron, excepto cuando es sobreveniente a la iniciación del servicio;
- 3º Negociación por cuenta propia o ajena, sin expreso permiso del principal, cuando afecta los intereses de éste.»

Art. 2º — Los principales están obligados, desde la promulgación de esta ley, a llevar un libro especial que tendrá todas sus hojas numeradas y rubricadas por el Departamento Nacional del Trabajo en la Capital Federal y territorios nacionales, y por las oficinas corres-

pondientes en las provincias, en el que conste el nombre de los empleados, factores, dependientes, viajantes, encargados u obreros; fecha de su ingreso, sueldos, salarios, comisiones, gratificaciones u otras remuneraciones que perciban, así como todo contrato de empleo y demás condiciones y datos a que se refieren los artículos del Código de Comercio que modifica la presente ley.

Art. 3º — Los empleadores podrán substituir las obligaciones impuestas en esta ley por un seguro constituido a favor de los empleados que ocupan, sin afectar las acciones directas de éstos contra sus principales, en compañías autorizadas por el Poder Ejecutivo nacional para esta clase de operaciones.

Art. 4º — Las acciones derivadas del contrato de empleo se regirán por el procedimiento establecido para las de indemnización por accidente del trabajo; excepto en los casos de divergencia causada por rebaja de la remuneración del empleado, que se resolverán por arbitradores designados por las partes. Si los arbitradores disintieran en su fallo, las partes designarán un tercero, y no poniéndose de acuerdo en su nombramiento dictará sentencia en tal carácter el respectivo juez de comercio.

Art. 5º — Las disposiciones de esta ley se declaran de orden público y se aplicarán a los casos de despido ocurrido desde el 1º de Agosto de 1932.

Art. 6º — Comuníquese, etc.

Sala de la comisión, Agosto 2 de 1932.

*Luis Grisolia. — Carlos D. Courel. —
Bernardo Sierra. — Enrique Dickmann. — Silvio L. Ruggieri. —
Carlos G. Colombres. — Agustín J. Carús. — Abraham de la Vega. —
Próspero Abalos.*

Sr. Ruggieri. — Pido la palabra.

La Comisión de Legislación General me ha confiado la tarea de informar a la Cámara sobre las modificaciones introducidas en su despacho anterior.

Cuando la Cámara resolvió tratar este proyecto con una preferencia que luego no se hizo efectiva, prestó asentimiento para que la comisión recogiera, en una reunión especial, que se ha realizado la pasada semana, las observaciones que tuvieran los señores diputados contra su despacho, autorizán-

dola, además, a proponer las reformas que creyera convenientes después de conocidas esas observaciones. Esas reformas, señor presidente, son las que están consignadas en el nuevo impreso que los señores diputados tienen en sus bancas.

Sólo concurrieron a la comisión, además de los miembros de la misma, los señores diputados Viechi, Ruiz Guíñazú y Vionnet, que aportaron las sugerencias que les había inspirado el estudio de este asunto. Su presencia ha sido oportuna y útil, porque ha servido para precisar el alcance de varias disposiciones del despacho y establecer, por comprensión de todos, la falta de necesidad de su modificación; y para aceptar, además, algunas observaciones que no alteran el concepto fundamental del proyecto, de estructura en cierto modo novísimo para el cuerpo general de nuestra legislación.

Todos los señores diputados han comprendido que fuera del pago de salarios, sueldos, comisiones u otros modos de remuneración, en los casos de accidentes o enfermedades inculpables, y de las vacaciones anuales pagas, el proyecto sólo establece como principio nuevo, además de la sanción penal que es la indemnización por falta de preaviso, la llamada indemnización por despido, variable según la antigüedad del empleado en el trabajo para el principal que debe pagar esa indemnización. Y para que el texto de la ley no autorizara interpretaciones contrarias al concepto con que la sanciona el legislador, hemos introducido en el artículo 155 un agregado, por el que se declara que en ningún caso el empleado tendrá derecho a más de una indemnización por su accidente o enfermedad.

Con este agregado se quiere significar qué ocurra o no el accidente con motivo del trabajo, por culpa del empleador o sin causa que le sea imputable, el empleado no tendrá derecho a más de una de las varias indemnizaciones que ha previsto el artículo por causa de accidente o de enfermedad.

Este principio excluyente no comprende, desde luego, la indemnización por despido, expresamente asegurada al empleado, aparte de la que le corresponda por accidente o enfermedad, si el declarado cesante por el empleador.

El principio de exclusión, por tanto — y subrayo el alcance que le damos a esta disposición del proyecto —, se refiere a las indemnizaciones de distinta especie y no a enfermedades o accidentes distintos, porque por cada accidente o enfermedad que interrumpa el trabajo, surgirá el derecho del empleado para continuar percibiendo sus remuneraciones normales.

He dicho, al referirme al artículo 155, que la continuidad de la retribución hasta un máximo de tres o seis meses, según la antigüedad en el trabajo, es independiente de la que deberá abonarse en los casos de despido.

Se me ha preguntado qué indemnización regirá cuando sin respetar los plazos de tres o seis meses el principal, en caso de accidente o de enfermedad, despide al empleado. En ese supuesto correspondería al empleado la retribución íntegra de tres a seis meses y además sin afectarla en lo más mínimo, la indemnización por despido.

Debo informar, ahora, en nombre de la comisión, que en este juego de retribución por accidente o enfermedad y la indemnización por despido, ha aceptado una modificación que suscribimos los diputados socialistas, evidenciando el criterio de amplitud y tolerancia jurídicas que hemos puesto en la elaboración del despacho. El anterior obligaba al principal, sin límite de tiempo, a conservar el puesto al empleado enfermo o accidentado después de tres o seis meses de retribución. En el que ahora tienen en sus bancas los señores diputados se establece un límite máximo de un año, contado después de vencidos los plazos de la retribución. Por un error, señores diputados, no se ha agregado una limitación que entiendo debe reducirse a tres meses, en los casos de servicio militar y después de terminado ese servicio.

En el artículo 156 se ha mantenido la reserva a favor del principal para elegir la fecha en que regirán los períodos de vacaciones anuales, asegurando su continuidad con la supresión de todo fraccionamiento en el descanso.

En el artículo 157 los plazos de preaviso se han reducido a uno y dos meses, eliminando el de tres. Es una concesión que hacemos a los principales comerciantes, que hemos aceptado aun cuando pueda afectar, con relación al despacho anterior, a los empleados de una antigüedad mayor de diez años, pero que no altera los beneficios fundamentales que este despacho les acuerda.

Con un nuevo agregado resolvemos una situación jurídica que hasta ahora había quedado librada a las interpretaciones siempre cambiantes de los señores jueces. Me refiero a la cuestión, tantas veces discutida, de si durante el plazo de preaviso el empleado está o no obligado a continuar en el trabajo. Algunos jueces afirman que sí, otros declaran que no, y estos últimos apoyados en la doctrina que ve en el plazo del preaviso el tiempo que necesita el empleado para buscar trabajo en otro lugar. Es teniendo en cuenta esta doctrina y esta interpretación, defendida en primer término por los empleados, que los principales comerciantes temen su aplicación con esta nueva ley, agregando sobre sus hombros otra carga por efecto de la ampliación a dos meses del plazo de preaviso cuando el empleado tenga más de cinco años de servicios.

Cuando se discutió en general este asunto, y refiriéndome a un memorial publicado por los grandes diarios de esta Capital, en el que se calculaba una erogación anual de más de 41.000.000 de pesos en concepto de indemnización por preaviso, sostuve que eso implicaba echar un borrón de mala fe sobre todo el comercio argentino, porque suponía el incumplimiento del preaviso en todos los casos de despido.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º, doctor Augusto Bunge.

Denuncié, sin equivocarme, y me ratifico, ese error, porque el proyecto no habla en realidad de indemnización por preaviso sino de indemnización «por falta de preaviso», lo que, *a contrario sensu*, significa establecer explícitamente que existiendo el preaviso no corresponde el pago de indemnización.

Para cohonestar el grueso error de la entidad patronal, se me ha dicho que ésta había calculado esa erogación entendiendo que durante el plazo del preaviso los empleados no tienen obligación de trabajar, imponiendo a los principales no sólo la necesidad de reemplazarlos sino también la de tener que pagar simultáneamente, durante los plazos del preaviso, las retribuciones que corresponden a los empleados reemplazantes y a los reemplazados. En la comisión se ha convenido resolver esta situación, en forma definitiva, en el mismo texto de la ley, evitando en adelante interpretaciones erróneas o encontradas, por las partes y por los jueces. Establecemos la obligación del empleado de continuar en el trabajo; pero concediéndole dos horas de licencia diaria, deducidas de su jornada normal de labor, permitiéndole así cumplir el propósito inspirador de la doctrina, de la no obligación de continuar en el trabajo durante el tiempo del preaviso; es decir, el propósito de buscar colocación en otro negocio o empresa comercial.

Esta solución, señor presidente, conforma en general a los empleadores y a los empleados, y debemos desde luego felicitarnos de su incorporación al despacho.

Es probable que los empleados sostengan que hubiera sido más equitativo dividir por partes iguales la jornada de trabajo. Personalmente, reconozco la justicia de ese argumento; pero, en un despacho de transacción, hemos preferido la limitación de la licencia diaria a dos horas antes que dejar librado este punto a la interpretación de los tribunales.

Hemos suprimido la indemnización por falta de preaviso en los casos de quiebra, partiendo de la base de que

ante la cesación del negocio, determinante de la disolución del contrato de empleo, no puede exigirse en justicia un plazo de preaviso y que sólo cabe asegurar el pago de la indemnización por despido.

También se ha planteado en el seno de la comisión la limitación de la indemnización por despido. En el despacho anterior no tenía límite, por considerar que imponiendo este proyecto de ley, por vía indirecta, la formación de las cajas de previsión patronales, era lógico esperar que esos actos de previsión se realizaran teniendo en cuenta a los empleados de todas las categorías, salarios y capacidades. Hemos aceptado, por espíritu de transacción, que se limitara la indemnización por despido a quinientos pesos por cada año de servicio, sin afectar la otra limitación, anteriormente establecida, y ahora ratificada, de que en ningún caso excederá de la mitad del salario mensual según promedio de los últimos cinco años de servicios.

En el artículo 160 se ha establecido que en los casos de despido por causa legal, no existirá para el empleador la obligación de indemnizar por falta de preaviso ni de despido. Esto último se había omitido en el despacho anterior.

Se han agregado dos artículos nuevos. Por uno de ellos, que figura con el número 3, se autoriza a los empleadores a substituir las obligaciones impuestas por esta ley, por un seguro constituido a favor de los empleados que ocupan, en compañías autorizadas por el Poder Ejecutivo nacional para realizar esta clase de operaciones. Reemplazamos de esta manera la obligatoriedad del seguro, que establecía el proyecto primitivo del señor diputado Adolfo Dickmann y que la comisión, por unanimidad — puntualizamos esta circunstancia — no ha aceptado, por creer que no corresponde, mientras no exista una caja nacional de seguros o compañías particulares que realicen estas operaciones. La reemplazamos, por eso, por la facultad, que se reconoce expresamente, de substituir las obligaciones que a los empleadores im-

pone esta ley, por seguros constituidos a favor de los empleados, sin afectar las acciones de éstos, como terceras personas en las pólizas de seguros, contra los principales.

Se habla aquí de compañías de seguros, es decir, de asociaciones que explotan comercialmente el ramo del seguro y no de cajas de previsión propias de los patrones, porque éstas se pueden organizar sin necesidad de que la ley lo establezca. Son actos propios del comerciante, que éste realizará en su propio beneficio y, desde luego, también de los empleados.

Las asociaciones entre cajas patronales de previsión constituirán de hecho compañías de seguros, cayendo bajo el régimen legal a que éstas se encuentran sometidas.

El último artículo de este nuevo despacho, señor presidente, establece el procedimiento en términos generales. Por la naturaleza de las obligaciones que impone esta ley, el procedimiento deberá ser sumario. No hay motivos para permitir una morosidad judicial que el legislador ha tratado de suprimir en otra clase de juicios, como en los de ejecución, desalojo, interdictos y también en los especiales de responsabilidad por accidentes del trabajo o enfermedad. Agregamos, además, un procedimiento especial cuando hay desinteligencias en la interpretación de las rebajas injustificadas de sueldos o salarios, estableciendo el juicio de arbitradores, con apelación al juez de comercio, cuando no hay acuerdo de las partes en la designación del tercero en los casos de divergencia entre aquéllos.

A la comisión, señor presidente, se han traído también dos sugerencias, que ella no ha aceptado: la de reducir el plazo de antigüedad anterior a la sanción de la ley, que se reconoce a los efectos de la indemnización, y la eliminación del pago de las indemnizaciones por despido a las familias de los empleados, cuando éstos fallecen.

La comisión no ha aceptado la primera porque ya se ha cercenado una parte importante del derecho de los

empleados, al reducir a diez años la antigüedad de los servicios anteriores a la ley.

He demostrado, en la sesión anterior, que la computación sin límites de la antigüedad que ya tenían los empleados en el momento de sancionarse la ley, no importa darle efecto retroactivo, y que aun en el supuesto de que se afirmara la existencia de ese efecto retroactivo, el Congreso puede acordarlo, por no tener inhibición constitucional alguna para hacerlo. Tampoco admitimos la exclusión del beneficio a las familias cuando fallece el empleado, de acuerdo con el concepto que informa toda esta ley, que es el de no desamparar al empleado o a su familia cuando sin causa imputable al primero cesa el contrato de empleo.

He reservado para el final de este informe una última observación, que la comisión ha recogido para agregar al artículo 154 algunas palabras que completan la definición del empleado de comercio, manteniendo la palabra «obrero» y agregándole, por indicación del señor diputado por Mendoza, doctor Vicchi, las siguientes: «que realizan tareas inherentes al comercio».

Creo que hay ahora unanimidad sobre este punto, contra el cual enfocaron su crítica, por error evidente de interpretación algunas entidades patronales, que involucraban en el término «obrero» a trabajadores que nada tenían que hacer con el comercio y cuya situación deberá contemplarse en otro estatuto legal, no en un proyecto de reformas a la ley mercantil.

Debo insistir ahora sobre la extensión que nosotros damos al concepto de empleado de comercio.

En los actos propios del comercio intervienen empleados auxiliares de distintas categorías o formas de trabajo. En los comienzos de esta actividad económica, sus distintas tareas, o en su mayoría, recaían casi siempre sobre una sola persona; el mismo empleado tenía a su cargo la limpieza del negocio, la preparación de las mercaderías, la venta al cliente, la fijación del precio, el cobro del mismo, el em-

paquetamiento, la anotación de las operaciones de contabilidad y la entrega. Todavía ahora se aprovecha este esfuerzo múltiple en los pequeños comercios.

El desarrollo de las grandes organizaciones comerciales ha extendido la división del trabajo, y es así como en toda operación comercial, desde que se inicia hasta que termina, intervienen personas de distintas categorías, capacidades y salarios; pero todas imprescindibles, porque la exclusión de una especialidad de trabajo aumenta automáticamente las tareas que corresponden a otra o a varias de las demás.

No podemos separar, en consecuencia, en la legislación que contempla el trabajo de los empleados, al que se limita a fijar precio y recibir un pedido de compra, del que debe preparar la mercancía para su exhibición a los clientes, o del que efectúa el cobro, o del que empaqueta, o del que lleva lo comprado a domicilio. Y menos podemos distinguir, para aplicarles un distinto criterio legislativo, al que vende detrás del mostrador del que cumple esa misma función de venta en el domicilio del cliente, ofreciendo muestras, recibiendo pedidos de compra, cotizando precios o fijando condiciones de pago.

Con este concepto se ha redactado el artículo cuando en la enunciación de los beneficiarios define al empleado de comercio. ¿Con qué criterio, preguntamos, de legislación o de justicia, podemos separar al que trata directamente con el comprador del que realiza otras tareas sin las cuales no es posible completar la figura jurídica del acto de comercio?

Esa división del trabajo entre los empleados del patrón comerciante, sea éste individuo o sociedad, se realiza en beneficio del empleador y de los clientes, perfeccionando en todos los casos el proceso de la operación mercantil.

Saben los señores diputados lo que ocurre en las grandes casas de comercio de esta Capital. Un empleado indica la sección respectiva del negocio;

otro conduce al cliente en el ascensor, un jefe de sección lo reenvía a la respectiva especialidad, donde se le exhibe el artículo y se fija precio; otro controla los precios y la cuenta, a veces en lugar invisible hasta para los propios compradores; otro cobra el precio de la mercadería vendida; otro empaqueta, y con frecuencia no termina la operación sin llevar la mercadería a domicilio.

Todos los empleados, señor presidente, deben igual diligencia para el patrón y para el cliente; todos deben dedicar su tiempo exclusivamente a esas tareas, durante las horas señaladas por el empleador. El presente y el porvenir de los empleados están en ese negocio, del que son verdaderos esclavos, porque fuera de allí no tienen la seguridad inmediata del trabajo y menos una igual remuneración. Las aptitudes y las condiciones de honestidad de todos los empleados de un negocio se contemplan por el principal para asegurar la eficacia del trabajo colectivo y la prosperidad de su casa de comercio.

La comisión no podía, por tanto, sin incurrir en una enorme e irritante injusticia, retirar, como con pinzas, para excluirlos de los beneficios de la ley, a algunos de los asalariados que cooperan en el negocio del principal para el tráfico de su comercio.

Ahora, en el terreno estrictamente jurídico, nadie podría pretender, sin lamentable desconocimiento de la materia, que sólo interviene en el acto de comercio el que vende, el factor y el llamado «dependiente», y que fuera de éstos no tienen cabida en la ley mercantil otras categorías de empleados. El mismo Código de Comercio, en varias de sus disposiciones, se encarga de demostrar la ilusión de los que pudieran pensar de semejante manera.

Los dependientes, señores diputados, no son forzosamente vendedores. El código legisla sobre los dependientes que tienen el encargo exclusivo de una parte muy limitada de la administración, como la que se detalla en el artículo 147 — por ejemplo, el giro de letras, recibo de capitales, etcétera —

o como la que cita el artículo 148: cobro de documentos. El artículo 150 declara aplicables varias disposiciones sobre los factores a los dependientes autorizados, dice el artículo, para regir una operación de comercio o alguna parte del giro o tráfico de su principal. El código se refiere también a los auxiliares del tráfico comercial, y debe aclararse que no ya a los auxiliares del comercio en general, sino a los auxiliares que dependen, por salario, del patrón, en el artículo 146, estableciendo que no tienen la facultad de contratar por sus principales, a no ser que expresamente se les autorice. Entran en esta categoría, señor presidente, los contadores, los tenedores de libros, como los electricistas de la casa, los vidrieristas, etcétera.

La ley mercantil, por lo tanto, considera no sólo la situación del empleado vendedor, sino de todos los auxiliares que necesita el comerciante para los actos de su negocio. Por eso necesitamos referirnos a todos esos auxiliares, y a los obreros vinculados con las tareas del comercio, en una legislación que contempla situaciones tan comunes como la necesidad del descanso anual, la conservación del empleo, la licencia por enfermedad, el preaviso para la terminación del contrato de empleo y la indemnización por despido.

Tengo presente, ahora, la crítica que han formulado algunas entidades patronales a este artículo del despacho. Se afirma que es necesario distinguir entre el empleado en cuyas tareas predomina el trabajo intelectual y aquel en que es mayor el esfuerzo físico o muscular. Si el primero es empleado, el segundo es obrero, y por simple efecto de esta definición se pretende que el primero puede gozar del amparo de la ley y el segundo quedar librado a su propia suerte; pero sin explicar, como debieran hacerlo estos teóricos del orden social, que combaten la idea de las luchas y divisiones de clases al mismo tiempo que dividen en clases a los propios asalariados, por qué razón se niega al obrero lo que se otorga o se reconoce al empleado.

No es cierto, por otra parte, que el obrero desocupado encuentre más fácilmente trabajo que el empleado en los casos de desocupación. Es harto pueril argumentar sobre diferencias al respecto. Las altas y bajas de la desocupación, según oficios y tareas, dependen de factores sociales económicos distintos, que poco o nada tienen que hacer con estas diversificaciones genericas de empleados y obreros.

Empleamos el término «obrero» para distinguir determinado tipo de auxiliares del comercio, porque es el que mejor lo define y para evitar interpretaciones que limiten el amparo legal a una categoría muy circunscripta de empleados de comercio. Ese término es el que se emplea en la legislación del trabajo y hasta cuando se refiere a tareas de tipo definitivamente comercial.

Es cierto que no se usa en el código vigente, atrasado en el lenguaje y en las soluciones que atañen a los trabajadores, como todos los códigos que tienen 40 o más años de sanción. Pero el derecho progresa con las costumbres y los cambios sociales, y es entonces explicable que en la ley escrita se introduzcan vocablos y conceptos ya arraigados en la conciencia del pueblo.

Prescindamos un momento, señores diputados, de los intereses contrapuestos que chocan alrededor del asunto. Inspirémonos en un sentimiento superior de armonía social, y tendremos la visión exacta de la justicia de este proyecto.

Conocíamos las opiniones de los patrones y de los empleados; pero nos faltaba la opinión de la magistratura y, especialmente, la de los jueces que han adquirido en esta materia una vasta experiencia a través de los casos que se someten a su decisión. Ha llegado esa voz y felizmente en hora, por coincidencia, muy oportuna.

Un importante diario de la tarde, que se ha singularizado por su campaña en contra de este proyecto, en un esfuerzo de tolerancia, que me place elogiar — me refiero a «La Razón» —, publica en su edición de anoche, una opinión realmente valiosa, la opi-

nión de un juez de comercio de esta Capital, el doctor Fernando Cermesoni, conocido, no sólo como juez de prestigio, sino también como autor de importantes monografías jurídicas. Tengo el reportaje aparecido en el diario que he citado. Ni una sola observación contraria al despacho que se está considerando. Su adhesión es absoluta, recomendando especialmente la inclusión de los obreros del comercio, las vacaciones pagas, el preaviso, las indemnizaciones por despido graduadas según la antigüedad, la irrenunciabilidad de los beneficios y el privilegio de los empleados para el cobro de las indemnizaciones; punto éste sobre el que sugiere una aclaración que yo propondré cuando se discuta el artículo respectivo del despacho. Es valiosa esta opinión, no sólo por su contenido jurídico sino también por el desinterés con que se aporta al estudio de este asunto.

Yo recojo esa opinión como un estímulo y como un aplauso para la comisión que ha formulado el despacho y para la Cámara que se muestra dispuesta a votarlo. Por eso pido permiso para su inserción en el Diario de Sesiones. (1)

Seame permitido ahora, señor presidente, agregar algunas palabras, no ya como miembro de la comisión, sino como diputado del sector socialista.

Desde tribunas extrañas al Congreso han arreciado los ataques contra este proyecto de ley. Se ha hecho uso y abuso de la crítica, llegándose a presentar al Congreso, y particularmente a determinado sector de esta Cámara, en la tarea sectaria de conspirar contra la estabilidad del comercio argentino. Como esos equívocos, movidos por la mala fe, suelen hacer camino, conviene recordar actitudes y precisar puntos de vista para que cada uno ocupe el lugar que en justicia le corresponde.

Sabemos los diputados socialistas que en la circulación de la riqueza, el comercio desempeña una función respetable e importante. Lo admiramos

(1) Véase página 824.

en la medida que en nuestro partido se aprecian los progresos técnicos y económicos que han incorporado a la civilización el desarrollo de la burguesía moderna.

Yo lo estimo tanto como me desagradaba ver en ciertas empresas mercantiles insistiendo, hasta en sus gráficos de propaganda, en el símbolo del viejo Mercurio de la mitología, que era al mismo tiempo, como saben los señores diputados, el dios de los comerciantes y de los ladrones.

Hemos defendido al comercio, con verdadera pasión, en esta misma Cámara, cuando los señores diputados de la mayoría votaron el impuesto a las transacciones. Se recordará que el señor diputado Repetto, desde su banca, hizo la apología del comercio, sin conmovér, desde luego, la opinión de la mayoría, que con ese gravamen rendía tributo a las exigencias crecientes del fisco argentino.

Pero sabemos, además, señor presidente, que el comercio no es sólo acumulación de capitales, de medios de producción y de cambio, sino también esfuerzo de grandes masas de hombres, y que sin ese esfuerzo la riqueza queda improductiva o deja de ser riqueza, porque no teniendo aplicación útil no reporta beneficio alguno a la colectividad humana.

Es que todavía no ha aparecido nada, señores diputados, que supere al factor humano. Cuando se nos habla de las maravillas de la técnica destructiva; de las potentes armas de la guerra; de los gases que enloquecen o matan; de los torpedos marinos que abaten moles gigantescas; de los enormes pájaros mecánicos que siembran el terror con su sola presencia, no podemos olvidar que para nada sirve todo ese instrumental bélico sin el esfuerzo y el coraje de los hombres que lo dirigen y emplean. Seguimos creyendo que más admirable que todo eso, si es que puede haber algo de admirable en la guerra, es el heroico lirismo de los hombres que, ciegos y torpes ante las fuerzas ocultas que los mueven, creen luchar por un ideal que consideran de libertad y de justicia;

y es el sacrificio de esos otros hombres que, teniendo conciencia del crimen de la guerra, marchan sonrientes hacia el violento y presentido fin de su existencia; y es también, señores diputados, la abnegación de esas mujeres magníficas que después de la batalla van al mismo campo de la muerte a rescatar los derechos de la vida! (*¡Muy bien!*).

¿Cómo no preocuparnos, entonces, del factor humano, si él es o debe ser el objetivo permanente y fundamental de toda acción de gobierno?

En la última campaña electoral, señor presidente, un político de la derecha sugería como programa de gobierno la protección a la industria argentina. Los hombres de nuestro partido, interpretando su pensamiento tradicional, contestaron que en primer término debía protegerse la industria del hombre, tarea propicia para pesar los quilates de nuestra argentinidad. Con este despacho afirmamos la protección a la industria del hombre. De esta afirmación, señor presidente, podrán vanagloriarse todos los sectores de la Cámara, si, como espero, confirman con su voto el pensamiento patriótico que en todo este asunto ha guiado a los miembros de la comisión.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Courel. — Pido la palabra para formular una moción de carácter previo.

Como acaba de manifestar el señor diputado Ruggieri, la comisión ha modificado en particular su despacho por unanimidad. De manera que para que él pueda ser considerado por la Cámara es necesario que el señor presidente recabe de la misma autorización para retirar el despacho que ya fuera informado en otra oportunidad y presentar en substitución el que en forma tan elocuente acaba de informar el señor diputado Ruggieri.

Hago moción en ese sentido.

Sr. Presidente (Bunge). — Efectivamente, señor diputado. La Cámara debe resolver previamente si autoriza a la comisión a substituir el despacho.

—Se llama para formar quórum.

Sr. Sierra. — Si hubiera asentimiento, podría darse por retirado el despacho.

Sr. Presidente (Bunge). — No hay número en el recinto, señor diputado.

Sr. Sierra. — El señor diputado podría postergar su indicación.

Sr. Ruggieri. — Deseo referirme a esa indicación.

Sr. Presidente (Bunge). — La Presidencia iba a plantear la cuestión porque es reglamentaria.

Sr. Ruggieri. — Quería significar que, en realidad, con la moción de aplazamiento formulada en la sesión anterior por el señor diputado Viechi se autorizaba a la comisión para modificar su primitivo despacho. De manera que no sería indispensable una nueva votación de la Cámara, aunque no me opongo.

Sr. Presidente (Bunge). — Hay número, señor diputado.

La Comisión de Legislación General solicitó autorización de la Honorable Cámara para substituir su despacho número 35 por el actual. Si ningún señor diputado se opone, se dará por aprobado.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Bunge). — Aprobado.

Tiene la palabra el señor diputado Sierra.

Sr. Sierra. — Quería expresar el voto de nuestro grupo favorable a la sanción del despacho que ha traído la comisión. El hecho de haberse presentado el despacho con fecha 2 de Agosto por la Comisión de Legislación General, de la cual formo parte, y de haberse considerado el mismo por la Honorable Cámara en su sesión del día 16 del mismo mes, cuando se aprobó en general por unanimidad, y la circunstancia de haberse presentado con posterioridad algunas observaciones ante la Comisión de Legislación que fueron recogidas por la misma en forma suficiente como para permitirle traer un despacho nuevo que está en este momento a consideración

de la Honorable Cámara, que ha sido informado con abundancia de argumentos y con conocimiento del asunto por el señor diputado Ruggieri, conceptos que comparto e interpretaciones de las que también participo, colocan el debate en la situación reglamentaria de una discusión en general.

Nosotros, como dije en una sesión anterior, tenemos algo que ver con el despacho que está ahora a consideración de la Honorable Cámara. Durante el actual período de sesiones el diputado Manuel González Maseda ha presentado un proyecto reproduciendo iniciativas anteriores y coincidiendo en el propósito fundamental perseguido por el proyecto que ha presentado también en este período de sesiones el diputado Adolfo Dickmann, que reprodujo un proyecto presentado por él el año 1929.

Cuando dije ante la Honorable Cámara que convenía el aplazamiento a fin de que dentro de la misma comisión nos pusiéramos de acuerdo y recogiéramos algunas observaciones que habían de facilitar la pronta sanción de este asunto, no estaba equivocado.

Hemos realizado en la comisión una hermosa reunión y hemos coincidido en aquellos propósitos que a todos animaba, con el fin de traer a la consideración de la Honorable Cámara un despacho bien hecho que permitiera su sanción legislativa. El señor diputado Ruiz Guinazú, de la provincia de Buenos Aires; el señor diputado Viechi, de la provincia de Mendoza, que estudió este asunto y llevó al seno de la comisión observaciones de importancia; el diputado Vionnet, del sector demócrata progresista, de la provincia de Santa Fe, han concurrido a la comisión, así como el señor diputado Adolfo Dickmann lo había hecho antes, llamado por la misma, a fin de aclarar algunos aspectos del articulado presentado.

Hemos hecho, como ha dicho con acierto el señor diputado Ruggieri, algunas observaciones al despacho y esta orden del día reformada que presenta a la consideración de la Cámara

no merecería ninguna otra observación de parte nuestra; pero, habiéndose considerado en nuestro grupo un aspecto del asunto relacionado con el contenido de este despacho, deseo manifestar que aunque el mismo lleva la firma de todos los miembros de la Comisión de Legislación General, hay dos puntos comprendidos en los dos últimos apartados del artículo 157 sobre los cuales hacemos una disidencia que esperamos será resuelta por la Honorable Cámara y que seguramente será indicada en el recinto. Me refiero a los efectos de la antigüedad, al carácter retroactivo que por un límite máximo de diez años se fija por esta ley, y al último apartado del artículo 157 que extiende los beneficios de esta ley a los empleados en caso de muerte.

Nosotros manifestamos en el seno de la comisión, como lo hicieron otros miembros, — el doctor Colombres especialmente —, que consultaríamos a nuestros respectivos grupos parlamentarios. El nuestro, con respecto a ese límite máximo de diez años, considera, como lo creen otros señores diputados, que debe ser reducido a cinco años; y que el último apartado que se relaciona con la indemnización para después de muerto el empleado que se acoja a los beneficios del mismo, y que se extiende a los herederos, debe ser eliminado de la ley. Dejaré bien aclarada nuestra posición respecto de este artículo, porque no estamos dispuestos a colaborar en una campaña demagógica por lo mismo que decía el señor diputado Ruggieri: que debemos dar una legislación seria, en relación al medio que vivimos; una legislación que pueda salir de esta Cámara y sea aprobada también por la de Senadores, para que entre a regir en las costumbres comerciales del país. Quiero recordar en esta ocasión el proyecto que presentó el ex diputado González Iramain, en representación del socialismo unido en aquel entonces, con fecha 30 de Septiembre de 1926. Ese proyecto perseguía el propósito de incorporar al Código de Comercio algunas cosas que ya habían sido tratadas por

nuestros tribunales, aceptadas por la jurisprudencia y que podían tenerse en cuenta para impulsar nuestra legislación en un sentido progresista y moderno. El diputado González Iramain, al presentar ese proyecto, que lleva también la firma del diputado señor Adolfo Dickmann, decía que presentaba a la consideración de la Cámara un proyecto deliberadamente moderado en sus alcances, a fin de que pudiera votarse sin mayores resistencias. «Iniciativas de reformas más atrevidas, dice, aunque igualmente fundadas en la realidad de los hechos y en necesidades premiosamente sentidas por el numeroso gremio al que este proyecto beneficiará especialmente, no consiguieren siquiera despacho de las comisiones de la Cámara». Se refería a los proyectos de los diputados Guillot y Míguez que no tuvieron en ese entonces despacho de comisión. Y agregaba: «Para que éste no corra la misma suerte, lo limito a lo estrictamente indispensable». Su proyecto consistía en añadir las palabras «empleados u obreros a sueldo o jornal» para evitar — decía su autor — que se discuta y se niegue la indemnización del mes de sueldo a que se refiere el artículo 157, a los trabajadores y empleados de comercio; en extender el beneficio acordado por el artículo 155, en casos de accidentes imprevistos o inculpables, a los de enfermedad profesional, que la legislación universal y también la nuestra, ha puesto ya en la misma categoría; y en modificar el artículo 157 en el sentido de exigir al principal, conforme a elementales normas de derecho sobre la materia, la prueba de la mala conducta de los factores, dependientes, empleados u obreros a su servicio, cuando la invoquen como causal de despido sin indemnización.

Y concluía el diputado González Iramain con estas palabras: «Se determina, además, en el último apartado, la forma como se fijará el importe o monto del mes de indemnización cuando la remuneración del factor, dependiente, empleado u obrero, consista en una co-

misión sobre las ventas o sueldo...» etcétera.

Este proyecto no fué despachado por la comisión, ni considerado por la Cámara; y entonces con fecha Julio 26 de 1928 el diputado González Iramain reproduce su iniciativa ampliándola, y dice en los fundamentos en la parte que modifica con relación al primer proyecto presentado: «Introduzco en el texto de este mismo artículo 157 un apartado nuevo, creando para los despedidos con más de un año de antigüedad, el beneficio del mes de sueldo de indemnización por cada año de servicios». Es aquí donde aparece el mes de sueldo de indemnización por cada año de servicios que ahora la comisión despacha acordando medio mes de sueldo.

«Beneficio nuevo en nuestra legislación, agrega, él existe desde 1914 en la República Oriental del Uruguay, donde se votara a iniciativa del Poder Ejecutivo de aquél país, que quiso reparar así, tempranamente, las injusticias de casas comerciales que invocando la crisis despedían — como entre nosotros — a meritorios empleados por la sola razón de que eran ciudadanos de algunas naciones beligerantes en la guerra europea. Ciertamente es que allí este beneficio está habilitado por el Banco de Seguros del Estado que entre nosotros no existe».

Esto es importante por lo que luego voy a manifestar respecto a nuestra disidencia en los puntos a que me he referido.

Sigue fundamentando su iniciativa el señor diputado Héctor González Iramain y la Comisión de Legislación General consideró el asunto y presentó despacho el 6 de Septiembre de 1928 tomando en cuenta esta iniciativa y la de los ex diputados Guillot y Míguez que también habían presentado iniciativas análogas.

Esa orden del día número 53 fué considerada por la Cámara el 26 de Septiembre. Informó el despacho a nombre de la comisión el entonces diputado Antonio de Tomaso quien pronunció palabras sensatas a favor de la

iniciativa. Se formularon entonces observaciones que tuvieron y tienen valor. El diputado Ferrarotti, hombre que tiene experiencia jurídica, que estuvo vinculado a la magistratura del país y que ha sido un inteligente parlamentario, presentó en esa discusión algunas de las objeciones que le merecía el despacho.

De ellas quiero citar solamente aquellas que se relacionan con el aspecto que debo considerar en este momento. Dice:

«Otro caso es el del comerciante que se retira de sus negocios por haber llegado a cierta edad, por un descanso a su trabajo de muchos años o por resultarle que el negocio no responde a sus aptitudes y este hombre no puede, en manera alguna, cerrar su casa, porque antes de hacerlo debe forzosamente pagar esa indemnización que es previa y que tal vez sea cuantiosa con relación a sus recursos, pequeños o medianos».

«Esa indemnización previa de despido es una especie de derecho adquirido de los empleados; así supongo que la comisión lo ha consagrado, como un derecho absoluto, de orden público, altamente respetable, si es que ese derecho, respondiendo a los propósitos tan humanitarios que el señor miembro informante ha enunciado, se tradujeran en el texto del proyecto que discutimos en una forma satisfactoria y regular.

«Otra situación posible: un comerciante que vende su negocio. ¿Quién paga la indemnización en este caso? Va a suceder muchas veces, tratándose de negocios de pequeño capital, que el comerciante se verá en la imposibilidad de venderlo, porque puede no estar en condiciones de pagar previamente la indemnización de sus empleados, si es que el adquirente no quiere tomar con el negocio que compra, a los empleados, endosándose una obligación del vendedor.

«Hay otro caso también interesante: el del comerciante que muere. No todos los comercios son prósperos y giran con grandes capitales, sin embargo si

muere un comerciante en una situación difícil sus descendientes estarán en la obligación de indemnizar a los empleados.»

Al final de sus observaciones el ex diputado Ferrarotti manifestaba lo siguiente: «Estos proyectos están inspirados en un principio generoso, y, de acuerdo con ello, me parece que podría contemplarse la situación de los empleados que durante cierto tiempo han prestado sus servicios en una casa de comercio, estableciendo la doctrina del preaviso con una antelación mayor que la fijada actualmente por la ley; podría obligarse al patrón a adelantar su rescisión con varios meses de anticipación o pagarlos despidiendo al empleado. Con esto no solucionaríamos algunas de las cuestiones complicadas que yo he tocado ligeramente, pero responderíamos a un concepto de verdadera equidad, si es que así se quiere.

«No debemos innovar, señores diputados, en estas cuestiones, sobre todo alterando principios viejos y fundamentales de derecho. En el Parlamento hace tiempo que quien habla de estas cuestiones de derecho parece un rutinario. Se procura innovar, pero no se innova justamente dentro de lo fundamental, sino en el detalle, creando premisas equivocadas para inducir de ellas las consecuencias más extraordinarias.

«El derecho nuevo, que vemos surgir lentamente a través de la lucha, que por muchos años se anuncia como una aspiración y más tarde se realiza, significa un esfuerzo enorme que anima a la sociedad, arranca de sus entrañas, no se justificaba ella, y en su molde para que surja como un principio definitivo, perfectamente encuadrado en la realidad. Para adelantarnos a su evolución no basta redactar modalidades nuevas, buenas o malas, por lo común perturbadoras, que les crearán derechos y acarrearán resultados insospechados.

«Hay muchos propósitos legislativos que son altamente simpáticos; uno los siente; pone en ellos todos sus entusiasmos y quisiera verlos realizados. En el concepto de los hechos, observando la

realidad, se tropieza con dificultades que lo derrotan. Vencer primeramente esas dificultades es necesario para que las aspiraciones más nobles se realicen.»

En los fundamentos del proyecto que el señor diputado Adolfo Dickmann presentó en la sesión del día 4 de Mayo del corriente año, proyecto que es el más completo en relación a todos los presentados anteriormente y que ha servido principalmente de base al despacho de la comisión, aunque ésta lo ha ampliado introduciéndole cosas que el señor diputado Dickmann seguramente no había pensado establecer en la ley — aunque no dudo que estará de acuerdo con ellas — decía: «Muchas de las observaciones formuladas por el señor diputado Ferrarotti, hechas seguramente con el propósito de aportar su concurso de legislador y su experiencia de ex magistrado al mejoramiento de la ley que se discutía, me han impresionado. Descartando el concepto demasiado arcaico y tradicionalista de «culpa», inadecuado ya para ser aplicado a la moderna legislación que se inspira, más en el criterio de la previsión social que en la culpabilidad o en el designio de los hombres a quienes no se les puede imputar lo que sólo es producto de causas y efectos de una organización social determinada; muchas de las observaciones formuladas por el diputado Ferrarotti son muy dignas de ser tomadas en cuenta. En efecto, no deja de impresionar por cierto el caso posible de un comerciante que por la insignificancia del monto de su capital o por la precariedad de sus negocios se viera en la obligación de afrontar compensaciones correspondientes a un empleado de veinte o más años, con un sueldo, por ejemplo, de seiscientos o setecientos pesos. Es evidente que en un caso semejante la compensación sería más que ilusoria. En situaciones parecidas podrían encontrarse comerciantes de buena fe y aquellos otros que para eludir las responsabilidades legales, fingieran balances y situaciones insolventes.

«No es cuestión de dictar leyes que tengan la intención de proteger a los

hombres de trabajo; hay que hacerlas de modo tal que realmente determinen esos beneficios en su aplicación práctica. El recuerdo de la ley 11.289 es demasiado fresco todavía, para que podamos desatender sus enseñanzas.»

Nosotros, al hacer estas observaciones con respecto a la retroactividad de la ley, que la comisión extiende a diez años y que queremos que se limite a cinco, y con relación a la indemnización para después de la muerte, que creemos que debe eliminarse del artículo presentado por la comisión, tenemos en cuenta principalmente esta circunstancia: no hay un seguro que pueda amparar al empleador para el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que aquí se le determinan. No hay un seguro, porque nosotros tampoco lo aceptamos y lo introducimos como seguro obligatorio, a pesar de que la comisión, con mucho acierto, en el artículo 3º establece que los empleadores podrán substituir las obligaciones impuestas en esta ley por un seguro constituido a favor de los empleados que ocupan, sin afectar las acciones directas de éstos para con sus principales, en compañías autorizadas por el Poder Ejecutivo nacional para esta clase de operaciones. No tenemos ninguna seguridad de que se vaya a establecer para el cumplimiento de esta ley el seguro, y si nosotros le damos un efecto retroactivo de diez años, al introducir ese elemento de reconocimiento de la antigüedad ya adquirida en el ejercicio del empleo por el empleado, complicamos más el asunto, introducimos un nuevo factor que va precisamente a dificultar el establecimiento del seguro y de la previsión social que debe existir para el cumplimiento de esta ley.

No habiendo, pues, seguro, es imprescindible limitar los efectos de la ley a lo indispensable y nosotros proponemos, en forma transaccional, que eso se fije en cinco años y creemos, también, que no existiendo seguro no podemos votar con tranquilidad la reforma, si no queremos que se repita lo que se ha dicho con respecto a la famosa ley de jubilaciones gremiales número 11.289. Por

esto, no podemos votar el último apartado del artículo 157 que dice:

«En caso de muerte del empleado, el cónyuge, los descendientes y los ascendientes, en el orden y en la proporción que establece el Código Civil, tendrán derecho a la indemnización por antigüedad en el servicio, limitándose para los descendientes a los menores de veintidós años y sin término de edad cuando están incapacitados para el trabajo. A falta de esos parientes, serán beneficiarios de la indemnización los hermanos, si al fallecer el empleado vivían bajo su amparo, y dentro de los límites fijados para los descendientes. Se deducirá del monto de la indemnización lo que los beneficiarios reciban de cajas o de sociedades de seguros por actos o contratos de previsión realizados por el principal.»

Sr. Dickmann (A.). — ¿Me permite, el señor diputado?

Sr. Sierra. — Sí, señor.

Sr. Dickmann (A.). — Como las observaciones que hace el señor diputado se refieren a la discusión en particular, no me propongo en este momento rebatir los argumentos que formula; pero no quiero pasar en silencio uno que tal vez conseguiría impresionar a los señores diputados.

Precisamente, el señor diputado objeto una parte de la ley que más fácilmente se presta al seguro y sobre la cual hay una experiencia universal conocida. Yo me explicaría que el señor diputado hiciera ese argumento contra la indemnización por despido del empleado, porque sobre eso, evidentemente, no hay ninguna experiencia; pero la disidencia del señor diputado es sobre la materia más fácilmente legible y en la que se puede determinar el monto del costo de las pólizas con toda precisión. Le llamo la atención sobre este punto porque es contradictoria su exposición con las conclusiones a que llega.

Sr. Sierra. — No, señor diputado.

Sr. Vicchi. — Es que el argumento fundamental del señor diputado es otro.

Sr. Dickmann (A.). — Yo me refiero al argumento del señor diputado y le

rogaría que no anticipáramos el debate. El señor diputado se ocupa de asuntos que deben ser tratados en otra oportunidad.

Sr. Vicchi. — Así pienso hacerlo.

Sr. Sierra. — No quiero dejar pasar por alto la observación que formula el señor diputado Adolfo Dickmann. El despido voluntario puede tener dos aspectos que dificultan su aplicación y esta puede ser una de las soluciones que lo faciliten. Como nosotros no vemos la facilidad con que pueda constituirse al amparo de esta ley que votamos, un seguro que resguarde al empleador para el cumplimiento de todo lo que nosotros acordamos aquí, como beneficio para los empleados, hacemos la observación y creemos que al suprimirse eso del despacho, éste saldrá ganando, y con ello se beneficiarán los propios empleados, porque no se verán expuestos a las medidas que adopten los empleadores en defensa del capital que han invertido en el comercio que dirigen. ¿No habrá una disminución de salarios, ni se hará repercutir sobre los empleados y obreros del comercio, en definitiva, todo lo que se acuerda como beneficio por esta ley?

Hay una circular, entre las tantas que han llegado al seno de la comisión, que aunque sea patronal puede citarse ante la Honorable Cámara, porque da cifras objetivas que nos sirven para gobernarnos en este asunto y poder opinar con un criterio realista, ajustado lo más posible a las condiciones y a las costumbres de nuestro pueblo.

La circular de la casa Saint Hermanos, que ha estudiado, parece, el asunto detenidamente, acompañando una nota que ha sido enviada a todos los señores diputados, dice en una de sus partes: «Que conviene traducir en números el enorme recargo que todo el cumplimiento de la ley entrañará para ellas, en base a los salarios abonados en el último ejercicio, que ascendieron a 3.546.385 pesos, lo que da por mes 295.000 pesos, y que lógicamente debemos suponer y admitir semejantes en las demás industrias».

Y sigue diciendo: «Para cumplimiento de las vacaciones, artículo 156, promedio de veinte días, dos terceras partes del mes, 197.000 pesos; accidentes y enfermedades, artículo 155, 10 % de personal, lo menos dos meses, 59.000 pesos; indemnización y preaviso, artículo 157, 10 % del personal, promedio de dos meses, 59.000 pesos; indemnización, antigüedad, artículo 157, 5 % del personal, promedio $\frac{1}{2}$ mes, 10 años, 73.000 pesos. Total, 389.000 pesos, o sea un aumento del 10 % sobre los salarios.»

Sr. Dickmann (A.). — El señor diputado está repitiendo lo que dice la circular que destruyó en su discurso el señor diputado Ruggieri. El señor diputado admite la posibilidad de pagar indemnización por preaviso. Una casa como la de Saint, de la seriedad que le es característica, se supone que dará el preaviso para no tener que pagar la indemnización.

Sr. Sierra. — Estamos de acuerdo, pero nosotros introducimos la institución del preaviso.

Sr. Dickmann (A.). — El señor diputado se hace cargo de argumentos que no deben traerse al debate.

Sr. Sierra. — Es un aspecto del asunto.

Sr. Ruggieri. — Es un error del señor diputado. La institución del preaviso ya existe en el Código de Comercio. Lo que agregamos es la indemnización por despido, independiente de la que corresponde por falta de preaviso.

Sr. Sierra. — Voy a una cosa que nadie puede negar, ni el señor diputado Ruggieri ni el señor diputado Dickmann, que es ésta: el cumplimiento, es lo que estaba diciendo, de todas las facilidades y beneficios acordados por la ley a los empleados y obreros origina un gasto a cualquier comercio o industria.

Sr. Dickmann (A.). — Pero no sume el preaviso ni las vacaciones pagas, porque las vacaciones se pueden establecer de tal manera que no haya necesidad de aumentar el personal.

Sr. Sierra. — Muy bien. Lo que yo quiero establecer es que el cumplimiento de la ley para los empleadores ori-

gina un gasto, una salida, y lo que me preocupa como socialista es saber quién la va a pagar, si el empleado o el obrero a quienes nosotros queremos acordar un beneficio, o si la va a pagar el empleador sacando una pequeña parte de sus ganancias con ese destino.

Sr. Courel. — ¿Quién paga el desgaste de las máquinas de una industria?

Sr. Dickmann (A.). — La máquina se puede amortizar, pero el hombre no...

Sr. Sierra. — Yo le voy a decir al señor diputado Courel...

Sr. Presidente (Bunge). — Permítame el señor diputado...

La Presidencia le ruega que no consienta más interrupciones, para reordenar el debate que está enteramente fuera de las prácticas, pues estamos discutiendo en general un despacho que ya ha sido aprobado en general.

Sr. Sierra. — Continúo, señor presidente.

Sin entrar, pues, a la explicación detallada de los dos aspectos sobre los cuales observamos nosotros el despacho, que es la retroactividad y la indemnización para después de muerto el empleado, quiero manifestar que en materia de seguros, el diputado Augusto Bunge, en representación de nuestro grupo, ha presentado el 25 de Julio del corriente año un proyecto de ley sobre seguro nacional, por el cual se instituyen los seguros sociales iniciales del seguro nacional hasta tanto se dicte la respectiva codificación; el seguro de maternidad, de enfermedad y complementarios, como son el de asistencia preventiva, el de vida, el de rentas generales y el seguro contra la desocupación.

No tenemos la absoluta seguridad de que el seguro va a venir a respaldar, como decía, el cumplimiento de esta ley. La comisión no establece al seguro como condición obligatoria sino que descarga al empleador en el caso de que se estableciera el seguro por el cumplimiento de la ley, en las compañías respectivas.

Por otra parte, nosotros estamos considerando un despacho avanzado,

progresista, moderno, que acuerda bastantes beneficios a los empleados, conquistas que nosotros queremos que se cumplan sin perjudicarlos, conociendo, como conocemos, los procedimientos que se siguen en el medio comercial e industrial argentino.

Tengo yo, traducido del inglés, un artículo aparecido en «The American Economic Review», volumen de Junio de 1932, que se titula «Legislación sobre cesantías» y que firma un profesor de la Universidad de Carolina del Norte, G. T. Schwenning, que hizo un estudio minucioso y detallado de las leyes sancionadas sobre esta materia del despido, del preaviso, de la cesantía de los empleados de comercio en todos los países civilizados de la tierra. Y aquí nosotros encontramos que para el cumplimiento de los fines y propósitos que persigue el despacho que presenta la Comisión de Legislación General, si no hay en lo que se refiere a esa indemnización para después de muerto y a la retroactividad la situación del seguro que puede ampararlo, hay para el cumplimiento de las otras disposiciones; en Francia, por ejemplo, el contrato o acuerdo colectivo de trabajo; en Alemania, los consejos de trabajo, que estudian las dificultades concediendo apelación ante las cortes de trabajo, que resuelven en definitiva todas las cuestiones que pueden presentarse en el cumplimiento de una ley de esta naturaleza; en Italia están los contratos colectivos de trabajo, que también sirven para el cumplimiento de este propósito; en Rusia, los contratos colectivos, los consejos de obreros y la corte del pueblo que resuelve en definitiva las dificultades que pueden presentarse; en el Uruguay está la Caja Nacional de Pensiones a que me he referido anteriormente, y en otros países está el contralor de los obreros y empleados en el manejo de los comercios y de la industria, está la participación en los beneficios, en las ganancias, están los consejos mixtos de empleados y obreros y de patrones y obreros, que resuelven las dificultades que pueden presentarse, y

están los tribunales de conciliación y arbitraje.

Nuestra legislación obrera, nuestra legislación social, no está suficientemente adelantada como para que nosotros introduzcamos en el Código de Comercio principios de legislación de trabajo que no tengan después sus organismos que puedan respaldarlos, que puedan obligar a su cumplimiento en las condiciones sociales del medio ambiente argentino.

A eso se deben las dos observaciones que hacemos nosotros. En atención a que suscribimos todo lo demás del despacho, en atención a que participamos de los fines que se persiguen y en atención a que hemos presentado iniciativas relacionadas con esta materia, que nos dan autoridad para opinar sobre la misma, deben ser tenidas en cuenta por la Honorable Cámara. Y estoy seguro que en esa forma mejoramos el despacho.

Comparten este criterio el diputado Colombres, del sector demócrata progresista, que opina en el mismo sentido que el diputado que habla y que es miembro de la comisión, y los diputados Abalos y de la Vega, que son también miembros de la comisión. Hemos querido que en el recinto se produjera la discusión, que cada uno dé su opinión, porque estando todos de acuerdo...

Sr. Parera.—¿Me permite una breve aclaración?

Sr. Sierra. — Sí, señor.

Sr. Parera. — Compartimos el criterio en cierta medida, según indicación que del bloque ha recibido el doctor Colombres, en cuanto a los herederos, limitándolo a los herederos forzosos.

Sr. Sierra. — ¿Y lo de los cinco años?

Sr. Parera. — De acuerdo.

Sr. Sierra. — A eso me refería. Ese es el fin que nosotros perseguimos, y queremos que se entienda nuestra posición en la forma que he manifestado. El obrero y el empleado no luchan solamente para modificar las relaciones económicas y de trabajo. Nosotros lo comprendemos, lo sabemos, y hemos estudiado algo como para opinar sobre

estas cuestiones. Tenemos la educación socialista suficiente como para interpretar las necesidades del numeroso gremio de empleados y obreros que esperan la sanción de esta ley; pero por lo mismo que sabemos que hay una Cámara de Diputados y hay un Senado de la Nación y que hay una cantidad de organismos patronales que se han movido alrededor de este asunto, y se han mandado al seno de la comisión innumerable cantidad de notas haciendo observaciones de forma y de fondo al contenido de la ley, queremos facilitar la sanción. Y creo que se facilita la sanción si la Cámara vota por unanimidad una cosa, lo que quiere decir que ha sido estudiada, que hay acuerdo suficiente como para que el Senado escuche la voz de la Cámara popular y de la ley que espera todo el país.

En ese estado de ánimo es que hacemos nuestras observaciones y creemos, como he dicho recién, que los obreros y los empleados no luchan solamente para modificar sus relaciones económicas y de trabajo, luchan también, cuando persiguen la sanción de leyes de esta naturaleza, por su personalidad, por su condición de hombres que pertenecen a una colectividad civilizada y quieren que no se les coloque en un rango inferior para tener la seguridad de vivir de una manera digna. En esta forma, se levantan contra el individualismo exagerado del derecho, al mismo tiempo que se afianza cada vez más la opinión de que éste debe modificarse por la intervención del elemento social.

Con ese concepto yo he aceptado que en el Código de Comercio se modifiquen los artículos referentes a los empleados, para ampliar sus beneficios e introducir instituciones nuevas en nuestra legislación, no ya comercial sino del trabajo. Esto, que debe constituir toda una ley especial, fuera de la codificación comercial argentina, nosotros lo aceptamos en el código para facilitar su sanción porque queremos que salga, deliberadamente moderada, para que, por lo menos, se consiga lo que todos los obreros y empleados de comercio espe-

ran: una indemnización para aquellos que sean despedidos sin justa causa y que tienen muchos años de trabajos realizados y que no contaban con ningún amparo en nuestra legislación.

En el seno de la comisión se sostuvo con mucho acierto, — y ahí se expresó mejor que en ninguna otra parte el criterio moderado y cuerdo que hemos puesto en el estudio del asunto, — acordar medio mes de sueldo por cada año de servicio al empleado que tuviere más de un año de servicio, cuando era despedido. Además, la comisión limitó a 500 pesos el máximo de la indemnización que puede recibir el empleado despedido, por cada año que prestó servicios.

Quiere decir que hemos estudiado el asunto con un criterio sensato que nos ha llevado a un acuerdo y no presentamos aquí sino disidencias claras y concretas, fáciles de entender y de resolver.

Por esas consideraciones nuestro grupo ha participado en la preparación del despacho y ha de votar a favor de esta nueva legislación, de este nuevo tipo de legislación comercial y del trabajo haciendo las observaciones que he tenido ocasión de manifestar.

Nada más.

Sr. Aráoz (J. I.). — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Bunge). — Permítame el señor diputado...

La Presidencia ha tenido que tolerar esta discusión en general por considerarla conveniente; pero como todas las modificaciones del despacho se refieren a puntos particulares del mismo, la Presidencia entiende que en adelante sólo corresponde considerar en particular los diferentes artículos.

Está, pues, en consideración, el artículo 154.

Sr. Aráoz (J. I.). — Se ha cambiado el proyecto, de tal manera, que es de aplicación un artículo expreso del reglamento.

Sr. Presidente (Bunge). — Se han hecho modificaciones en particular.

Sr. Aráoz (H.). — Se ha retirado el final del despacho.

Sr. Presidente (Bunge). — Permítame el señor diputado, deseo explicarle.

Se ha pedido y obtenido autorización de la Honorable Cámara para retirar el despacho y substituirlo por otro que contiene determinadas modificaciones a ciertos artículos. Por lo tanto, la Cámara no puede votar en general este despacho sin incurrir en una reconsideración que no corresponde. Lo pertinente, entonces, señor diputado es que — sin perjuicio de satisfacer su deseo de que se lea el artículo que ha solicitado — se entre a la consideración en particular porque ha habido tolerancia de la Presidencia para discutir en general las modificaciones, que son en realidad de carácter particular.

Sr. Aráoz (J. I.). — Deseo que se lea el artículo pertinente del reglamento.

Sr. Presidente (Bunge). — Se va a leer.

—Se lea:

Artículo 92. — Ni el autor de un proyecto que esté aún en poder de la comisión o que se esté ya considerando por la Cámara, ni la comisión que lo haya despachado, podrán retirarlo, ni modificarlo, a no ser por resolución de aquélla, mediante petición del autor o de la comisión en su caso.

Sr. Presidente (Bunge). — Ese es el artículo.

Sr. Aráoz (J. I.). — Ha sido retirado el primer despacho.

Sr. Presidente (Bunge). — La Cámara ha autorizado ya, por una votación expresa, la substitución del primer despacho por otro.

Sr. Aráoz (J. I.). — Ha autorizado el retiro del proyecto por uno nuevo. El reglamento dice que en este caso el nuevo proyecto sigue el trámite general de los demás proyectos.

Sr. Presidente (Bunge). — La Cámara se pronunciará, pero entiende la Presidencia que no hay lugar sino a tratar el despacho en particular.

Sr. Aráoz (J. I.). — Es reglamentario lo que sostengo.

Sr. Vicchi. — Pido la palabra.

Deseo hacer una aclaración con respecto al procedimiento que se ha seguido.

En realidad, la Comisión de Legislación ha aceptado modificaciones en particular. Esas modificaciones podían haberse producido mientras se trataban los diversos artículos; pero, como eran tantas, la comisión, por una razón de método, ha creído conveniente hacerlas conocer previamente.

Sr. Presidente (Bunge). — Es lo que entiende la Presidencia.

Sr. Vicchi. — De manera que estamos siempre con la sanción general del proyecto y estamos tratando en particular el asunto, y las objeciones que tengan que hacer los señores diputados se deberá efectuar al discutirse cada artículo.

Sr. Presidente (Bunge). — ¿Insiste el señor diputado por Tucumán en su observación?

Sr. Aráoz (J. I.). — Insisto en que hay una disposición reglamentaria.

Sr. Presidente (Bunge). — La Cámara se pronunciará previa lectura del artículo reglamentario en que se basa la observación.

Sr. Dickmann (A.). — Hago indicación en el sentido de que la Cámara pase a votar en particular el despacho.

Sr. Aráoz (J. I.). — Pido que se lea el artículo 124 del reglamento.

Sr. Presidente (Bunge). — Se va a leer.

—Se lee:

Artículo 124. — Un proyecto que, después de sancionado en general, o en general y parcialmente en particular, vuelve a comisión, al considerarlo nuevamente la Cámara, se le someterá al trámite ordinario como si no hubiese recibido sanción alguna.

Sr. Aráoz (J. I.). — No sólo esto, sino que ha retirado la comisión el primer despacho y ha presentado uno nuevo.

Sr. Presidente (Bunge). — Permítame el señor diputado. Entiendo que el señor diputado por Tucumán no

tiene presente el trámite que ha seguido esta modificación. La Cámara no ha autorizado de antemano el retiro de este despacho. Únicamente ha autorizado a la comisión a introducir determinadas modificaciones en su despacho y la ha autorizado recién en la sesión de hoy.

Sr. Aráoz (J. I.). — En la sesión pasada se ha postergado el estudio de este asunto...

Sr. Presidente (Bunge). — Entiendo que la solución más sencilla será votar de nuevo en general el despacho.

Sr. Dickmann (A.). — La indicación que he formulado es precisamente en el sentido de que la Cámara exprese, por medio de una votación, que la sanción en general subsiste.

Sr. Martínez (J. H.). — Es evidente. Lo que se votó en general es la idea en sí.

Sr. Presidente (Bunge). — La Cámara va a resolver si subsiste la sanción en general hecha por unanimidad en la sesión anterior.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Bunge). — En consideración en particular el artículo 1º del despacho de la comisión en la parte referente al artículo 154 del Código de Comercio.

Sr. Parera. — Pido la palabra.

Con perdón de la comisión que ha subscrito por unanimidad este despacho, me voy a permitir observar la redacción del artículo 1º.

Este artículo 154 en proyecto es casi reproducción fiel del artículo 154 del Código de Comercio que se reforma. Habla exclusivamente de los empleados de comercio — factores, dependientes, etcétera — que cometen malversaciones o incurran en negligencia o falta de exacta ejecución de las órdenes e instrucciones del patrón o empleador.

Al referirse a la malversación, alude, naturalmente, a una especie determinada de delitos. No involucra ni comprende la defraudación, el robo, el hurto, las formas distintas de de-

lincuencia que pueden producirse o en que puede incurrir el factor, dependiente o empleado, es decir, la culpa delictual en general, pues sólo se refiere a una de sus formas específicas: la malversación. De aquí que el artículo sea incompleto.

Esta observación que formulo es la que los tratadistas y comentaristas de nuestro Código de Comercio hacen alrededor del artículo 154 vigente. Para no abundar en mayores antecedentes — porque no era yo el encargado de intervenir en este asunto sino el miembro de la comisión, diputado Colombres — recordaré la opinión del autor Siburu comentando el artículo 154, del cual es copia casi exacta el que propone la comisión. Dice el doctor Siburu: «La malversación, la negligencia o la falta de exacta ejecución de las órdenes son formas diversas de la culpa, la cual tiene por inmediato efecto la responsabilidad de quien produce el acto culpable. La regla, pues, de este artículo 154 es de derecho común y no habría necesidad de establecerla especialmente para los factores. Si la culpa es contractual, se determinará de conformidad a lo dispuesto por el artículo 540 del Código Civil y si es aquiliana, por la responsabilidad relativa a los delitos o cuasi delitos.»

Quiere decir que el artículo 154 propuesto por la comisión está de más y debe suprimirse o debe modificarse de manera que comprenda todas las formas de la delincuencia, la culpa delictual y la culpa contractual.

No sé qué opina la comisión sobre este particular.

—Reasume la Presidencia el doctor Juan F. Cafferata.

Sr. Courel. — Pido la palabra.

El señor diputado manifiesta que hay un defecto de redacción en este artículo, y en realidad no es así. La comisión ha introducido una modificación en el artículo, sin darle otra interpretación que la que los tribuna-

les tienen establecida para el artículo 154 del Código de Comercio.

Sr. Parera. — Artículo cuya redacción es objeto de críticas unánimes.

Sr. Courel. — Objeto de críticas por parte del comentarista Siburu.

Sr. Parera. — Debemos conformar la ley a la doctrina y a la jurisprudencia.

Sr. Courel. — Se discute si en el artículo 154 del Código de Comercio debe comprenderse el caso de malversación o si este caso debe ser incorporado lisa y llanamente al Código Penal, que acaba de citar el señor diputado.

Sr. Parera. — No he citado el Código Penal sino el Código Civil.

Sr. Courel. — La comisión no ha modificado ninguna interpretación sobre malversación, falta de exacta ejecución o negligencia. Lo que ha hecho es establecer quiénes son empleados de comercio.

Cree la comisión que no es el caso de contestar al señor diputado sobre si es exacta la interpretación que pueda dar el comentarista Siburu y sobre la doctrina que él sustenta sobre el artículo 154 del Código de Comercio.

Sr. Bunge. — Pido la palabra.

Yo me proponía una observación concordante con la que acaba de hacer el señor diputado por Santa Fe.

Si nos ponemos a reformar el Código de Comercio, debemos reformarlo bien. Si se reforma un artículo en esta parte que me parece muy objetable con el agregado que se ha hecho de los viajantes, que pueden ser perjudicados gravemente por la incorporación de diversos beneficios que pueden hacerse incidir sobre ellos mismos, otros impracticables, como el del sueldo de vacaciones — ya éstas no podrían ser contabilizadas — debemos reformar la última parte que, tomada literalmente, es una verdadera monstruosidad jurídica.

Me llama la atención que no fuera reformada esa parte, porque corremos el riesgo de que una nueva jurisprudencia anule la anterior. Interpretado exactamente el sentido de las últimas líneas de este artículo, significa que cualquier empleado que cause un da-

ño por falta de cumplimiento exacto de las órdenes es pecuniariamente responsable ante el empleador. Un pobre mandadero que va a llevar una alhaja y olvida el domicilio, y a causa de eso no lo entrega a tiempo, si la caprichosa dama que lo haya comprado se niega a recibirla al día siguiente, la casa se perjudicará en varios centenares de pesos por entorpecimiento en la entrega. Con el espíritu literalista de algunos de nuestros jueces, éste se vería obligado a indemnizar el perjuicio en falta de exacta ejecución de las órdenes. Es realmente enorme responsabilizar a empleados por esas faltas. Por eso pensaba proponer una segunda modificación al texto, concordante con la mejor redacción del Código Civil: «Es responsable del daño que cause por dolo o negligencia culpable».

Sr. Parera. — La culpa o negligencia son términos sinónimos. Al referirse a las órdenes debería referirse «a las estipulaciones contractuales». Esa sería la expresión jurídica. ¿No es así, señor diputado, que con tanto desgano ha tomado en cuenta?...

Sr. Courel. — La Comisión de Legislación no es una fuente de interpretación de la ley; es decir, del artículo 154 del Código de Comercio.

Sr. Parera. — Pero propone una modificación. Hagamos la modificación conformándola a la jurisprudencia y a la doctrina. El sentido común está diciendo que si hablamos de malversación, debemos hablar también de defraudación, que al fin y al cabo no es sino otra forma de delincuencia, como el robo, el hurto, etcétera.

Sr. Presidente (Cafferata). — ¿Ha terminado el señor diputado por la Capital?

Sr. Bunge. — No he terminado, señor presidente. Me han tomado la palabra.

Sr. Presidente (Cafferata). — ¿El señor diputado ha autorizado las interrupciones?

Sr. Bunge. — No, señor presidente.

Sr. Presidente (Cafferata). — Que dan notificados los señores diputados que el señor diputado por la Capital no admite las interrupciones.

Sr. Bunge. — Quería decir que en el concepto general temía equivocarme; pero los abogados me han explicado que el concepto de «dolo» del Código Civil involucra todo: robo, malversación, defraudación. En una palabra, toda intención de hacer daño, sea en beneficio propio, o sea por simple placer de hacer daño. Por consiguiente, la palabra dolo, comprende la malversación.

Por otra parte, nuestro Código Civil, cuya virtud es su clarísima y precisa redacción, insiste reiteradamente en calificar a la negligencia y responsabiliza al autor de la negligencia, sólo cuando es culpable.

Entiendo que si incorporamos en substitución de la mala terminología de la ley vigente, los términos de dolo y negligencia culpable...

—El señor diputado Parera hace una interrupción que no se alcanza a percibir.

Yo no soy abogado, señor diputado, de manera que puede usted ponerme a la miseria si me interrumpe antes de que pueda desarrollar mi argumentación.

Sr. Parera. — Le hacía una aclaración, señor diputado.

Sr. Bunge. — Después podrá hacerla.

Quiero decir que si incorporamos a este código la terminología del Código Civil y la jurisprudencia tanto en el terreno civil y comercial, es decir, si reemplazamos las palabras existentes por dolo y negligencia culpable, se aclarará el espíritu de las disposiciones, y prevenimos que una nueva jurisprudencia determine interpretaciones desastrosas para los empleados de comercio. Y necesitaba dar esta razón: nada sale de nada.

Se van a proponer por este despacho beneficios que implican aumentos de salario. Será natural que los empleadores, que no han sido hasta ahora estrictos en exigir el cumplimiento literal de esa disposición del Código de Comercio, intenten resarcirse de los gravámenes nuevos de la ley, tratando de conseguir se aplique al pie de la letra la disposi-

ción; en unos casos para obtener despidos, en otros para eximirse de las indemnizaciones. Es de capital importancia que una ley que aumenta los beneficios ajuste perfectamente bien la responsabilidad de los beneficiarios para impedir que esos beneficios se vuelvan contra los beneficiados por la ley como puede suceder en este caso. Por eso he hecho la proposición a la comisión.

Sr. Courel. — Desde luego, la modificación propuesta por el señor diputado por Santa Fe toma un poco de sorpresa a los miembros de la comisión, que no han podido conversar sobre este asunto.

Sr. Parera. — Deseo aclararle. No he querido sorprender a la comisión. Se lo hice presente al diputado Colombres para que le transmitiera estas objeciones.

Sr. Courel. — Lamento que el diputado Colombres no haya interpretado al señor diputado por Santa Fe, porque no llevó al seno de la comisión este cambio que es fundamental.

No quiero hacer cátedra de derecho sobre este punto para contestar las palabras del señor diputado Bunge cuando habló de dolo y negligencia culpables a pesar de que el señor diputado por Santa Fe aclaró diciéndole que eran términos sinónimos. Creo que se trata de tres cosas completamente distintas. La malversación, negligencia o falta de exacta ejecución de sus órdenes o instrucciones, son tres cosas distintas. Una se refiere al acto delictuoso que es la malversación.

Sr. Parera. — Malversación únicamente.

Sr. Bunge. — Que es un dolo.

Sr. Courel. — El dolo, señor diputado, es parte de un delito; el delito es algo más que el dolo, de manera que me permito decirle que dolo y negligencia culpable es una misma cosa. De modo que si algún miembro de la comisión estuviera conforme se podrá cambiar la palabra «malversación» por «actos delictuosos» o «delitos».

Sr. Parera. — Es lo que quería decir.

Sr. Courel. — En ese caso quedaría aclarada la duda suscitada por el señor diputado por Santa Fe y apoyada por el señor diputado Bunge. Yo no he tenido tiempo de conversar con los miembros de la comisión, pero se me ocurre que podría modificarse así la redacción.

Sr. Bunge. — Hago presente al señor diputado que esta observación la he dado por escrito a varios miembros de la comisión.

Sr. Courel. — Lamento que no haya llegado.

Sr. Parera. — Dolo, culpa o imprudencia.

Sr. Palacio. — Pido la palabra.

Para adherir a la interpretación del señor diputado Bunge.

Creo que el factor o dependiente de comercio no puede ser responsable ante el principal por la falta de cumplimiento exacto de las instrucciones que le dió. Esto sería dejar en manos del principal, en todos los casos, disponer la cesantía o responsabilidad del empleado.

Por otra parte creo que la redacción del artículo quedaría bien diciendo simplemente, que el factor es responsable ante el principal por el dolo o culpa en el ejercicio de sus funciones. Culpa o negligencia es lo mismo. No debe caracterizarse como lo hace el artículo, que solamente en el caso de que el empleado haya cometido una malversación, ha delinquido. Estableciendo el concepto general, la existencia del dolo, éste supone el delito, la intención criminal por parte del dependiente de comercio. De modo que cuando se diga que el empleado es responsable del dolo y de la culpa, se abarca todo. La culpa es un delito que está penado por el Código Penal y estos son los dos únicos casos en que el empleado puede ser responsable ante el principal. Pido que se vote así.

Sr. Parera. — La culpa no comporta delito siempre y ella puede ser contractual o aquilina, según los casos. Es contractual cuando se dejan de cumplir las estipulaciones de un contrato, sin que haya delito en este acto.

Sr. Ruggieri. — Pido la palabra.

El señor diputado doctor Courel ha

precisado el alcance que la comisión ha querido dar a la reforma de este artículo. Nuestro propósito ha sido aprovechar este proyecto de ley para dar una nueva definición del empleado de comercio.

Reconozco, como el señor diputado Parera, que esta disposición es superflua, en cuanto repite la que está en vigor, porque aunque no sancionáramos este artículo en todos los casos de daño causado por dolo o culpa — para emplear los términos exactos de nuestra ley civil — son responsables los empleados...

Sr. Parera. — No sólo los empleados sino toda persona de acuerdo con el artículo 1.109 del Código Civil.

Sr. Ruggieri. — Era lo que iba a decir.

De manera que, como miembro de la comisión, acepto la redacción que propone el señor diputado por Córdoba, agregando después de las palabras «sus intereses» las siguientes: «por dolo o culpa en el ejercicio de sus funciones.» (*¡Muy bien!*).

Así quedará aclarado el concepto del artículo y no habrá dudas en su interpretación.

Sr. Courel. — Hay mayoría de la comisión en ese sentido.

Sr. Presidente (Cafferata). — La comisión acepta, entonces, la enmienda propuesta a su despacho.

Sr. Ruggieri. — Podría substituirse la preposición «a» por «ante», diciendo «son responsables ante sus principales», etcétera.

Sr. Bunge. — Podría suprimirse también el término «cualquier» diciendo simplemente «del daño que causen».

Sr. Ruggieri. — También aceptamos la supresión de la palabra «cualquier».

Sr. Presidente (Cafferata). — Se va a dar lectura del artículo con las modificaciones aceptadas.

Sr. Secretario (González Bonorino). — «Artículo 154. — Los empleados de comercio — factores, dependientes, viajeros, encargados u obreros que realizan tareas inherentes al comercio — son responsables ante sus principales del daño que causen a sus intereses

por dolo o culpa en el ejercicio de sus funciones.»

Sr. Presidente (Cafferata). — Se va a votar el artículo en la forma que acaba de leerse.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee:

Artículo 155. — Los accidentes y las enfermedades inculpables que interrumpen los servicios del empleado de comercio — factor, dependiente, viajante, encargado u obrero — que trabaja a sueldo, jornal, comisión u otro modo de remuneración, sea en dinero o en especie, alimentos o uso de habitación, no le privarán del derecho a percibir dichas retribuciones hasta tres meses de interrupción si tiene una antigüedad en el servicio que no exceda de diez años, y hasta seis meses si tiene una antigüedad mayor de este último tiempo.

Sr. Parera. — Podría votarse por partes.

Pregunto a la comisión el significado de las palabras «uso de habitación».

Sr. Ruggieri. — Son los términos que emplea el Código Civil.

Sr. Parera. — El Código Civil dice «uso o habitación», no uso de habitación. Salvo que sea otro el concepto.

Sr. Ruggieri. — Es la misma redacción que figura en la ley de accidentes del trabajo, de donde la hemos tomado.

Sr. Presidente (Cafferata). — ¿El señor diputado por Santa Fe propone alguna modificación al artículo?

Sr. Parera. — La expresión la encuentro algo incongruente. Por eso pido explicaciones a la comisión.

Sr. Ruggieri. — El artículo no se refiere sino al derecho de uso de habitación.

Sr. de la Vega. — Es cuando el principal da la vivienda.

Sr. Dickmann (A.). — Pido la palabra.

Rogaría al señor miembro informante, no porque yo tenga dudas, sino para que no la tengan los que van a aplicar la ley, que nos dijera que el uso de habitación a que se refiere este artículo no es la habitación que se otorga al

empleado en algún rincón de la casa de comercio, sino piezas especialmente habilitadas para que puedan ahorrarse el alquiler...

Sr. Ruggieri. — La cuestión que se plantea es extraña al concepto del artículo y rogaría a los señores diputados no sugieran interpretaciones que complicarán después la aplicación de la ley.

Está perfectamente usado aquí el término y se refiere a uso de habitación, cuando forma parte de la remuneración que se paga al empleado.

Sr. Dickmann (A.). — Era indispensable esa aclaración porque dependientes de comercio me han hecho llegar la información de que actualmente tienen habitación pero que no puede entrar como remuneración porque son inhumanas.

Sr. de la Vega. — Es una situación de hecho.

Sr. Ruggieri. — Esos empleados interpretarían la ley, en este caso, contra sus propios intereses. Al contrario de lo que suponen, deberá darse un valor al uso del lugar que ocupan como habitación, aumentando así el salario básico para fijar la indemnización.

Sr. Bunge. — Iba a decir precisamente lo que acaba de manifestar el señor miembro informante de la comisión. Les conviene a los empleados de comercio, expoliados hasta el punto de verse obligados a dormir debajo del mostrador, que les sea tasado por el juez el valor locativo de ese mostrador en los veinte o treinta pesos mensuales que vale una habitación humana.

Sr. Dickmann (A.). — Es lo que quería aclarar.

Sr. Bunge. — Creo que los términos en que está redactado el apartado son perfectos y que no necesitan mayores aclaraciones.

Sr. Presidente (Cafferata). — ¿La comisión mantiene el despacho tal cual está redactado?

Sr. Ruggieri. — Sí, señor presidente.

Sr. Dickmann (A.). — Yo no hice objeción ninguna a la redacción, he pedido una aclaración del concepto y la obtuve.

Sr. Presidente (Cafferata). — El señor diputado por Santa Fe había hecho una observación a la redacción.

Sr. Parera. — Había pedido una aclaración al texto de la ley, y con la que se ha dado resulta más beneficiosa, porque aparece más amplia. Si se diera el concepto de uso o habitación del Código Civil parecería más restringido el alcance de la ley. Yo lo voy a votar con aquel concepto.

Sr. Aráoz (J. I.). — Pido la palabra.

Aunque los señores miembros informantes de la comisión han aclarado el concepto de «empleados de comercio», surge una dificultad al considerar el caso de los viajantes de comercio, que están incluídos en la ley, en razón de que la comisión ha hecho un agregado a la disposición del proyecto, según la cual son causas para despedir a un empleado: «negociación por cuenta propia o ajena sin expreso permiso del principal», añadiendo «cuando afecta los intereses de éste.» De tal manera que, según la comisión, y por ese agregado, un viajante de comercio puede ser empleado y atender varias casas de negocios y tener los mismos beneficios en las varias casas a la vez. Desearía saber si la comisión aceptaría que se diga «empleados viajantes de comercio exclusivos de la casa», para evitar ese inconveniente.

Sr. Ruggieri. — La dificultad que apunta el señor diputado está claramente salvada con el párrafo del inciso 3° del artículo 160, que se refiere a «negociación por cuenta propia o ajena sin expreso permiso del principal». Los viajantes que atiendan más de una casa de comercio obtendrán en todos los casos el permiso del respectivo principal, y cuando no lo tengan no podrán gozar de los beneficios si hacen negocios por cuenta de otro.

Sr. Aráoz (J. I.). — El concepto debe ser que sea empleado exclusivo.

Sr. Ruggieri. — Está aclarado: debe contar con el permiso del principal.

Sr. de la Vega. — No podemos defender más allá el interés del principal, desde el momento que está en manos

de él privar al viajante de este beneficio nada más que negándole el permiso para que pueda negociar por cuenta de otra casa.

Sr. Aráoz (J. I.). — Habría otra observación, señor presidente...

Sr. Presidente (Cafferata). — ¿Sobre el apartado en discusión?

Sr. Aráoz (J. I.). — Sí, señor presidente: sobre el primer apartado.

Este proyecto de ley autoriza tres clases de indemnizaciones por este artículo: la una, en caso de enfermedad o accidente de orden general, es decir, que sean o no imputables al trabajo; autoriza también indemnizaciones especiales de la ley de accidentes, por enfermedad o accidente, comprendidas en esa ley; y, además, un tercer caso que no está amparado por este proyecto ni por la ley de accidentes y sí por el Código Civil. En estas condiciones me parecen un tanto excesivas las ventajas y creo que podrían reducirse con muy poca cosa o sea dejar en tres meses el salario a correr en el caso previsto por el artículo que estudiamos.

El apartado dice también que el empleado tiene derecho a seguir percibiendo su remuneración durante tres o seis meses, según la antigüedad, y yo haría esta pregunta: ¿cuántas veces durante el año puede enfermarse el empleado y tener derecho a este beneficio, o es por una sola vez?

Sr. Ruggieri. — He explicado, en el informe que he dado a la Cámara...

Sr. Aráoz (J. I.). — Tal vez no haya oído, señor diputado.

Sr. Ruggieri. — ...que por cada enfermedad o accidente vuelve a encontrarse en la misma situación.

Sr. Aráoz (J. I.). — Entonces, tiene derecho a la indemnización por despido y por enfermedad.

Sr. Ruggieri. — Son casos muy excepcionales.

Sr. Aráoz (J. I.). — Pero son posibles.

Sr. Ruggieri. — El empleador tiene derecho a la rescisión del contrato.

Sr. Aráoz (J. I.). — La enfermedad no es un caso excepcional.

No quiero entrar en otros detalles, por lo que propongo que la comisión reduzca ese plazo de seis meses, porque hay empleados de mala fe que pueden hasta simular enfermedades.

Sr. Ruggieri. — Ese es otro error del señor diputado, que repite una objeción formulada por algunas entidades patronales. No puede haber simulación de accidentes o de enfermedad, porque los empleadores siempre tendrán el derecho de controlar su existencia real, exactamente como se hace ahora con respecto a los accidentes del trabajo o enfermedades profesionales.

Sr. Aráoz (J. I.). — Yo desearía que la comisión reconozca que las ventajas de este artículo son, en el fondo, excesivas y para evitar toda discusión propongo que el período de seis meses por año quede reducido a tres meses, en todos los casos.

Sr. Presidente (Cafferata). — ¿La comisión acepta?

Sr. Ruggieri. — No, señor presidente.

Sr. Presidente (Cafferata). — Se va a votar el despacho de la comisión. En caso de que fuera rechazado, se votará la modificación propuesta por el señor diputado por Tucumán.

—Se vota y aprueba el despacho de la comisión.

—Sin observación se dan por aprobados los siguientes párrafos:

La retribución mensual que en estos últimos casos corresponde al empleado, se liquidará de acuerdo con el promedio del último semestre.

El empleado conservará su puesto y si dentro del año transcurrido después de los plazos de tres y seis meses indicados, el principal lo declarase cesante, éste le pagará la indemnización de despido del artículo 157.

La indemnización por accidente o enfermedad que establece el primer apartado de este artículo no regirá para los casos previstos en la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, cuando por esta última corresponda al empleado una indemnización mayor.

—En consideración:

El derecho a la retribución en los casos de accidentes o enfermedades inculpables, no excluye el que tiene el empleado a la indemnización por los años o pérdidas que sufra durante el servicio que presta al principal, y que estará a cargo de éste.

Sr. Ahumada. — Pido la palabra.

Me provoca una duda este apartado. En el caso de que el empleado sufra un accidente, una enfermedad profesional o inculpable — término que usa esta ley — tendrá derecho a tres acciones distintas, si no me equivoco.

Sr. Ruggieri. — La dificultad queda salvada en el párrafo siguiente, donde se dice: «En ningún caso el empleado tendrá derecho a más de una indemnización por su accidente o enfermedad».

Sr. Ahumada. — De las tres acciones que de acuerdo con el apartado que acaba de leer el señor diputado Ruggieri puede hacer uso el empleado, éste sólo puede optar por una de ellas: o la de indemnización de tres a seis meses a que se refiere el primero de los apartados, la segunda, o sea la acción especialmente reglada por la ley de accidentes del trabajo, y la tercera, la acción civil ordinaria. Entiendo que son excluyentes, y por eso quería dejar sentado que son tres acciones distintas, que no podrán, en ningún caso, acumularse.

Sr. Vicchi. — Con un propósito distinto.

Sr. Courel. — Hay un agregado al respecto, que yo había pedido leyera la Secretaría, que dice que «en ningún caso el empleado tendrá derecho a más de una indemnización por accidentes». Con eso quedaría completamente aclarado.

Sr. Gómez. — No se oye nada, señor presidente. Convendría que se elevara la voz.

Sr. Presidente (Cafferata). — El señor diputado por Corrientes reclama que levanten un poco más la voz los señores diputados.

Sr. Gómez. — Tampoco hemos oído la lectura, y es un asunto que nos interesa.

Sr. Ahumada. — Habrá casos en que la acumulación de acciones va a ser fácil: un mismo hecho podrá caer dentro de la ley de accidentes del trabajo y, en otros aspectos, dentro de la acción común.

Sr. Iribarne. — Las acciones son optativas, no acumulativas.

Sr. Ahumada. — Entonces, repito, lo que quiero dejar sentado expresamente, si la comisión está conforme conmigo, es que un hecho por distintos aspectos que tenga, sólo puede dar origen a una de las tres acciones a que acabo de referirme.

Sr. Ruggieri. — He subrayado, cuando comenzó a hablar el señor diputado, que en el párrafo siguiente al que ahora se está considerando se resuelve la cuestión planteada. Es evidente que existen varias acciones; pero cada una de ellas es excluyente de las otras.

Sr. Iribarne. — Naturalmente.

Sr. de la Vega. — No puede haber sino una sola indemnización, a opción del interesado. Este puede requerir la que más le convenga.

Sr. Presidente (Cafferata). — Sírvanse no dialogar los señores diputados.

Sr. Vicchi. — Pido la palabra.

La situación que plantea el señor diputado Ahumada es perfectamente clara, pero probablemente el señor diputado incurre en un error de apreciación. Desde luego, en la generalidad de los casos las acciones contemplan situaciones distintas. Puede haber casos excepcionales en que un hecho caiga bajo las dos acciones, pero es indudable que si opta por una excluye la otra. ¿Qué ocurrirá en la práctica? El interesado optará por la acción que más le convenga.

Es el mismo caso que ocurre con la ley de accidentes del trabajo, que establece una indemnización parcial, en tanto que la acción del derecho común fija una indemnización integral. Como son excluyentes, el obrero cuando la que está en condiciones de ejercitar es la acción de derecho común, la ejerce; de lo contrario prefiere la otra de juicio sumario, que es mucho más fácil.

Sr. Ruggieri. — A los efectos de

ilustrar la futura interpretación de este artículo del proyecto, quiero manifestar que estamos hablando de acciones excluyentes cuando se refieren a un mismo hecho, accidente o enfermedad; pero que pueden subsistir dos acciones cuando una se refiere a enfermedad y la otra a un hecho que no tiene nada que hacer con el accidente o la enfermedad. Existe el derecho a la acción común de pérdidas o daños causados por motivos extraños a estas últimas causales, en cuyo caso no extingue las otras, pudiendo ejercerse simultáneamente, sin excluirse.

Sr. Pinedo. — El señor diputado por Catamarca quiere dejar establecido que hay tres acciones, pero hay que optar.

Sr. de la Vega. — Que se vote.

Sr. Presidente (Cafferata). — La comisión mantiene su despacho.

Se va a votar, entonces, el apartado que está en discusión.

— Resulta afirmativa.

— Se lee:

En ningún caso el empleado tendrá derecho a más de una indemnización por su accidente o enfermedad.

Sr. Bunge. — Señor presidente: falta leer — como ocurre cuando hay numerosos apartados — uno de ellos: el antepenúltimo.

Sr. Presidente (Cafferata). — Se ha leído y se ha puesto a consideración de la Cámara, señor diputado.

Sr. Ruggieri. — Es el que se acaba de discutir y votar.

— Se lee:

También conservará el empleado su puesto cuando deba prestar servicio militar por llamado ordinario, movilización o convocatorias especiales.

Sr. Presidente (Cafferata). — Están en consideración los dos últimos apartados que se han leído, porque el penúltimo, con motivo de la pregunta del señor diputado por la Capital, no se votó ni se declaró aprobado.

Sr. Ruggieri. — Pido la palabra.

Por un error, señor presidente, y ya lo hice notar en el informe general, en este último apartado se ha omitido establecer el término o plazo de la obligación del empleador para conservar su puesto al empleado una vez terminado el servicio militar.

Debemos aplicar en este caso el mismo principio votado al referirnos a los casos de accidentes o enfermedad.

En consecuencia, propongo que a este último apartado se agreguen las siguientes palabras: «hasta tres meses después de terminado el servicio».

Sr. Presidente (Cafferata). — ¿Es una indicación en nombre de la comisión, señor diputado?

Sr. Ruggieri. — Sí, señor diputado.

Sr. de la Vega. — Me parece que sería bastante el término de un mes. El ciudadano desobligado de los deberes del servicio militar, tiene suficiente tiempo con 30 días para volver a su puesto.

Sr. Ruggieri. — Es demasiado breve el término.

Sr. de la Vega. — No hago cuestión de días más o menos, pero me parece mucho tres meses.

Sr. Ruggieri. — La comisión acepta 30 días.

Sr. Parera. — Una pregunta aclaratoria a la comisión: ¿es con goce de sueldo...?

Sr. Courel. — Sin sueldo, señor diputado.

Sr. de la Vega. — Naturalmente, porque el suplente está ganando el sueldo.

Sr. Martínez (J. H.). — Lo que se conserva es el derecho al puesto.

Sr. Contte. — Me parece oportuno pedir una aclaración sobre la situación de los nuevos empleados que el principal tome para reemplazar a los otros empleados, ¿tendrán las ventajas que aquí se acuerdan?

Sr. Ruggieri. — Tendrán derecho al medio mes de sueldo por año de servicio, con el mínimo de un mes, porque entran dentro del régimen de la ley.

Sr. Contte. — Es un empleado que va a reemplazar a otro momentáneamente.

Sr. Ruggieri. — Para el empleado reemplazante su situación es independiente del empleado a quien reemplaza.

Sr. Contte. — Pero no para el empleador, que tiene que pagar dos veces.

Sr. Ruggieri. — Tendrá la obligación de pagar medio mes de sueldo, por año de servicio, de acuerdo con lo que establece la ley.

Sr. Contte. — ¿Esa es la inteligencia del despacho?

Sr. Ruggieri. — Sí, señor diputado.

Sr. Contte. — Es lo que quería saber.

Sr. Aráoz (J. I.). — Pido la palabra.

En el comercio hay muchas circunstancias en que se necesita personal transitorio durante, por ejemplo, tres o cuatro meses. Creo que convendría prever ese caso.

En el caso del servicio militar se trata de uno a dos años. Pero el personal transitorio a que me refiero es utilizado por un período breve, de algunos meses, y medio mes de indemnización puede resultar excesivo para tan corto plazo.

Sr. Ruggieri. — Al formular su observación, el señor diputado olvida que por el actual Código de Comercio un empleado que trabaja un solo día al servicio del principal ya tiene derecho al mes de sueldo.

Sr. Aráoz (J. I.). — Son los casos generales. Y yo me refiero a la situación de empleados que prestan servicios transitoriamente. Me parece conveniente prever ese caso. En el caso de licencia, se obliga al principal a tomar un empleado transitorio...

Sr. Courel. — No se le obliga a tomar empleados transitorios. Para suplir a otro por enfermedad...

Sr. Aráoz (J. I.). — Licencia, enfermedad o servicio militar.

Sr. Courel. — Tampoco se le obliga. Puede no tomarlo.

Sr. Aráoz (J. I.). — Me parece que conviene prever el caso de los empleados transitorios.

Sr. Courel. — El despacho limita al establecer un tiempo mínimo con respecto a los empleados de comercio. Es necesario que transcurra el término de

tres meses al servicio del principal, para que se le considere empleado. Observe el señor diputado la limitación que esto significa. Se modifica la situación actual del código, según el cual es suficiente que el empleado esté una hora al servicio del principal para que tenga derecho a la indemnización.

De manera que el caso de suplencia por un término breve a que se refiere el señor diputado, no está comprendido en la ley.

Sr. Presidente (Cafferata). — Se da por aprobado el penúltimo apartado del artículo en discusión.

En cuanto al último apartado, la comisión mantiene su despacho con el agregado siguiente: «hasta treinta días después de terminado el servicio».

Se va a votar ese apartado.

—Se vota y resulta aprobado, en la siguiente forma: «También conservará el empleado su puesto cuando deba prestar servicio militar por llamado ordinario, movilización o convocatorias especiales.»

Sr. Presidente (Cafferata). — En consideración el artículo 156.

—Se aprueba dicho artículo hasta el inciso d) inclusive.

—En discusión el apartado final del referido artículo que dice así: «Queda reservada al principal la elección de la época en que regirá el período de descanso.»

Sr. Molina. — Pido la palabra.

Propongo que después de la palabra descanso se agregue: «dentro del año calendario».

La lucha gremial me ha dado experiencia suficiente para llegar a proponer ese agregado porque no estableciéndose la indicación que propongo se va postergando la fecha de los descansos anuales y, al finalizar el tiempo, se encuentra con que los patrones no han cumplido con el otorgamiento de la licencia. Por eso me parece importante determinar que la licencia debe acordarse dentro del año calendario.

Sr. Courel. — La comisión no puede aceptar el agregado propuesto por el señor diputado por Córdoba porque al principio del artículo dice «descanso anual» y no puede referirse a otra cosa que a ese calendario que quiere el señor diputado que se establezca.

Sr. Bunge. — ¿Qué sucedería con el empleado tomado en el mes de Diciembre?

Sr. Molina. — Convendría, sin embargo, se estableciera el agregado que propongo...

Sr. Courel. — Le doy la razón al señor diputado, si me permite, con un ejemplo práctico: ¿cómo considera el señor diputado la situación de un empleado que entra a trabajar en el mes de Noviembre?; ¿cuándo debe gozar de la licencia?

Sr. Molina. — En el año calendario siguiente debe acordársele la licencia.

Sr. Courel. — Sí, señor diputado; como si se considera un período mínimo para que sea empleado, tres meses, se encuentra que tendrá derecho de gozar de licencia después del mes de Enero, dentro del año siguiente.

Sr. Molina. — No es que pueda interpretarse por ese artículo que la licencia no sea anual; pero lo que ocurre es que por diversas razones los patronos postergan esas licencias porque queda librado a ellos la elección de la época del año en que las acuerdan; con el transcurso del tiempo se acumulan las licencias y al final no se puede cumplir dentro del año.

Sr. Courel. — Los empleados de comercio serán los mejores defensores de la ley y si ellos no formulan sus reparos a esas licencias así acordadas, la comisión nada tiene que agregar. Por estas razones no acepta la comisión el agregado.

Sr. Pena. — Entiendo que lo que propone el señor diputado por Córdoba está contemplado en el pensamiento del despacho.

Sr. Presidente (Cafferata). — Se va a votar el apartado tal cual lo redactó la comisión.

—En discusión el artículo 157.

Sr. Bunge. — Pido la palabra.

Comprendo que la comisión, para no alterar la enumeración del articulado del Código de Comercio, se haya visto obligada a redactar en este caso un artículo extremadamente largo; pero lo es tanto, que puede dificultar las referencias al mismo la falta de enumeración de sus apartados.

Me limito, pues, a proponer a la comisión que acepte que sean numerados los apartados.

Sr. Martínez (J. H.). — Sería mejor usar letras.

Sr. Bunge. — Lo mismo.

Sr. Ruggieri. — Pido la palabra.

Nosotros aceptamos, en general, la clasificación de las distintas disposiciones de este artículo; pero yo pediría a la Cámara que no improvisara en la división de los párrafos, porque hay varios que comprenden una misma cuestión.

Podría autorizarse a la comisión dividir con letras los distintos apartados del artículo.

Sr. Bunge. — Pido que se autorice a la comisión la separación de los apartados con letras o números, en forma que cada uno conserve la unidad necesaria.

Sr. de la Vega. — Aunque es una cuestión formalista, yo entiendo que esa es tarea de la Presidencia, quien buscará los medios de realizar los propósitos del señor diputado.

Sr. Sierra. — Como no tenemos en el Congreso una comisión revisora de los proyectos sancionados, entiendo que es la misma Comisión de Legislación la que debe realizar esa tarea.

Sr. de la Vega. — No es esa la misión de la comisión, una vez recaída sanción en el despacho.

Sr. Bunge. — Podría autorizarse a la Presidencia a realizar esa tarea de acuerdo con la Comisión de Legislación.

Sr. Presidente (Cafferata). — Habiendo asentimiento general así se procederá.

—Sin observación se vota y aprueba:

Artículo 157. — El contrato de empleo no podrá ser disuelto por voluntad de una de las partes sin previo aviso y en su defecto, indemnización, además de la que corresponderá al empleado por su antigüedad en el servicio cuando se disuelva por voluntad del principal.

—En discusión:

Esta regla se aplicará también en los casos de cesación o liquidación del negocio que no sean determinados exclusivamente por la fuerza.

Sr. Parera. — Pido la palabra.

Será el caso de aclarar qué entiende la comisión por fuerza mayor en este caso. ¿La quiebra?

Sr. de la Vega. — Hay un verdadero peligro en la pregunta formulada por el señor diputado. Son cuestiones de interpretación, de criterio jurídico conocido, y que corresponde a los tribunales. Comprendo perfectamente el propósito que persigue el señor diputado, pero tiene sus peligros, que es dar a una comisión de la Cámara la misión de dar reglas de interpretación, que en algunos casos se han aceptado, pero con muchas salvedades, por el Poder Judicial. Prefiero que no nos embarquemos en este aspecto de la cuestión, que en realidad excede el propósito que la comisión ha tenido que es introducir el menor número de modificaciones respecto de los artículos vigentes del Código de Comercio, que han merecido ya una jurisprudencia que en gran parte los aclara y los explica, y reducir el despacho principalmente al propósito que se ha tenido de reglar las relaciones entre principales y dependientes.

El concepto de fuerza mayor está dado por el derecho civil y ha sido motivo de una abundante jurisprudencia.

Sr. Parera. — Es restrictivo el criterio de la comisión...

Sr. Ruggieri. — El caso que cita el señor diputado está especialmente contemplado en el despacho. Espere la parte pertinente del artículo y conversaremos.

Sr. Parera. — Debiera decirlo la comisión, porque si dejamos librado el punto a la interpretación judicial, resultará restrictiva.

Sr. de la Vega. — Pero el señor diputado pide un concepto sobre la fuerza mayor. Yo me permito decirle muy repetuosamente al señor diputado que esa no es una norma respetable para la vida parlamentaria.

Sr. Parera. — Lo hago con el objeto de proponer una enmienda si fuese necesario.

Sr. Presidente (Cafferata). — ¿El señor diputado por Santa Fe propone algo concreto?

Sr. Parera. — Ante la aclaración hecha no, señor presidente.

Sr. Salas. — Pido la palabra, para una modificación sobre esta parte del artículo.

Debe decir «Cesación o liquidación del negocio», en lugar de «Cesación o liquidación el negocio.»

Sr. Ruggieri. — Es un error tipográfico.

Sr. Presidente (Cafferata). — Tomará nota la Secretaría.

—Sin observación, se votan y aprueban los siguientes apartados:

El preaviso, cuando una convención de partes no lo fija en un término mayor, deberá darse con la anticipación siguiente:

- a) De un mes, cuando el empleado — factor, dependiente, viajante, encargado u obrero — tiene en el servicio una antigüedad no mayor de cinco años;
- b) De dos meses, cuando el empleado tiene en el servicio una antigüedad mayor de cinco años.

Estos plazos correrán desde el último día del mes en que se comunica la cesantía. La notificación deberá probarse por escrito.

Durante el término del preaviso, y sin que se disminuya su sueldo, jornal, comisión u otro

modo de remuneración, el empleado gozará de una licencia diaria de dos horas dentro de su jornada normal de trabajo.

En caso de cesantía sin aviso previo en los plazos señalados, el principal pagará al empleado una indemnización equivalente a la retribución que corresponde al período legal de preaviso.

También abonará el principal al empleado, en todos los casos de despido, haya o no preaviso, una indemnización no inferior a la mitad de su retribución mensual por cada año de servicio, o fracción mayor de tres meses, tomándose como base de retribución el promedio de los últimos cinco años o de todo el tiempo del servicio cuando es inferior a aquel plazo. Para fijar el promedio se computarán como formando parte de los sueldos y salarios, las comisiones u otra remuneración y todo pago hecho en especie, en provisión de alimentos o en uso de habitación. En ningún caso esta indemnización será inferior a un mes de sueldo ni mayor de quinientos pesos por cada año de servicio.

La suspensión de tareas por más de tres meses, en el período de un año, ordenada por el principal, se considerará como despido.

La rebaja injustificada de los sueldos, salarios, comisiones u otros medios de remuneración, no aceptada por los afectados, colocará a éstos en situación de despido y con derecho a percibir la compensación que establece este artículo.

Cuando se produzca la cesión o cambio de firma, o cuando la precedente no haya dado el aviso previo en los plazos ya enunciados, y en los casos de suspensión de tareas o rebaja injustificada de las retribuciones, pasarán a la nueva firma las obligaciones que establecen este artículo y los dos anteriores.

En caso de falencia del principal, el empleado tiene derecho a la indemnización por despido, según antigüedad en el servicio.

Cuando el contrato de empleo se disuelve por voluntad del empleado, éste deberá preavisar al principal en los mismos plazos de este artículo, y en su defecto pagará la indemnización que por falta de preaviso se establece para el empleador.

—En discusión:

Las indemnizaciones por cesantía y por falta de preaviso que corresponden al empleado no

están sujetas a moratoria ni a embargo, y regirá a su respecto lo dispuesto para salarios y sueldos en el artículo 4º de la ley 11.278. Estas indemnizaciones gozarán de privilegio general sobre los bienes del deudor.

Sr. Ruggieri. — Pido la palabra.

De acuerdo con una sugestión formulada por el señor juez de comercio doctor Cermesoni, a la que me he referido en la exposición de esta tarde, pido que al final de este apartado se agregue: «y se pagarán con preferencia a los créditos con privilegio especial». En cuanto a los créditos con privilegio sobre la generalidad de los bienes del deudor, tendrá que respetarse el orden que establece la ley de quiebras; pero, además, esos créditos por indemnización deben tener prelación sobre los créditos con privilegio especial.

Sr. Parera. — Eso significaría modificar el orden de los privilegios que establecen el Código Civil y la ley de quiebras. Los gastos de justicia tienen privilegio especial...

Sr. Ruggieri. — Privilegio sobre la generalidad de los bienes del deudor. Por eso he hecho notar que se respeta el orden de los privilegios generales. Los créditos por gastos de justicia, de conservación y de última enfermedad, tienen preferencia sobre los sueldos y salarios de los empleados no obstante estar incluídos en la misma categoría.

Sr. Parera. — Entonces habría que establecerlo.

Sr. Ruggieri. — Se establece al decir que gozarán de privilegio general sobre los bienes del deudor. Se respeta el orden de los privilegios generales que establece la ley; pero propongo que se paguen con preferencia a los créditos con privilegio especial, no a todos los créditos con privilegio general.

Sr. Parera. — Créditos con privilegios generales aceptaremos para dentro de ese orden de privilegios establecer la preferencia.

Sr. Ruggieri. — Dentro de los privilegios de carácter general no establecemos preferencia; respetamos el orden

ya vigente. La preferencia la establecemos con respecto a los créditos con privilegio especial. El caso del locador que cita el doctor Cermesoni es terminante. Los jueces suelen encontrarse con créditos de obreros que no pueden cobrar sus jornales o sueldos por estar absorbido el haber del comerciante con el crédito del locador.

Sr. Parera. — Queda establecido que los gastos funerarios...

Sr. Ruggieri. — Tienen privilegio de carácter general.

Sr. Parera. — Con esa aclaración, estoy de acuerdo.

Sr. Bunge. — La ficción jurídica de nuestro Código Civil, señor presidente, de que el hombre que trabaja por un sueldo o salario «alquila» su trabajo, me parece que debe llevar a los partidarios de no tocar jamás el Código Civil a ser los más entusiastas en aceptar este agregado, porque es más sagrado el único bien del trabajador, su fuerza de trabajo, que cualquier bien inmueble: debe evidentemente tener privilegio el trabajo que según esa ficción jurídica nuestra se alquila, sobre una casa o un terreno alquilados.

Sr. Presidente (Cafferata). — Si no se hace uso de la palabra se va a dar lectura por Secretaría.

—Se lee:

Las indemnizaciones por cesantía y por falta de preaviso que corresponden al empleado, no están sujetas a moratoria ni a embargo y regirá a su respecto lo dispuesto para salarios y sueldos en el artículo 4º de la ley 11.278. Estas indemnizaciones gozarán de privilegio general sobre los bienes del deudor y se pagarán con preferencia a los créditos con privilegio especial.

Sr. Presidente (Cafferata). — Está en consideración.

Sr. Vicchi. — Me parece que se van a producir confusiones.

Sr. Parera. — Hace una confusión de privilegio especial...

Sr. Ruggieri. — No hago ninguna confusión, señor diputado. Tenemos a la vista el artículo pertinente de la ley de quiebras.

Sr. Vicchi. — La modificación del despacho que se propone va a traer una serie de perturbaciones. Pediría a la comisión que mantenga su despacho.

Sr. Ruggieri. — Los locadores tienen una garantía mayor que los bienes del deudor; es la fianza que en casi todos los casos se exige para asegurar el cobro de los alquileres.

Sr. Parera. — Nadie defiende al locador, sino a los otros privilegios, que tienen su razón de ser. Hablar de privilegios generales y especiales y hacer esa confusión...

Sr. Ruggieri. — No hay confusión.

Sr. Parera. — Se dice que tiene privilegio general o privilegio especial...

Sr. Martínez (J. H.). — Son excluyentes.

Sr. Ruggieri. — Los créditos con privilegio general son los que el señor diputado Parera está empeñado en presentar con privilegio especial.

Sr. Parera. — Tienen un privilegio general y especialísimo.

Sr. Ruggieri. — El artículo 94 de la ley de quiebras dice: «Son acreedores con «privilegio general» aquellos cuyos créditos procedan de algunas de las causas siguientes: 1º Los gastos para la seguridad de los bienes, administración de la casa fallida y demás diligencias judiciales, etcétera. 2º Los gastos funerarios si la declaración de quiebra ha tenido lugar después del fallecimiento, etcétera. 3º Los gastos de la última enfermedad, en caso de quiebra declarada después del fallecimiento, etcétera. 4º Los salarios de los factores, dependientes y criados del fallido u obreros que ha empleado directamente por los seis meses inmediatamente anteriores a la declaración de quiebra.»

Por eso sostenemos que el crédito por indemnización en caso de despido, tendrá privilegio general sobre los bienes del deudor, respetando el orden de preferencias que establece la ley comercial, en el orden que acabo de leer.

Sr. Parera. — Digámoslo así no más: privilegio general.

Sr. Ruggieri. — Hacemos el agregado para establecer una prelación con respecto a los créditos con privilegio especial. Si no se establece, los créditos por locación tendrán preferencia con respecto a los créditos de indemnización por causa de despido, sobre el producido de los bienes existentes en el inmueble arrendado.

Sr. Parera.—¿Por qué? Porque aplica las normas del Código Civil. Hace la confusión de privilegio general y especial.

Sr. Ruggieri.—Proponemos un nuevo orden de preferencia.

Sr. Parera.—El Código Civil es distinto que el de Comercio en materia de privilegios. Pero que no hablemos de privilegio general y especial no quiere decir que haya una incongruencia de orden jurídico.

Para modificar la norma del Código Civil agreguemos: «y se pagará con preferencia a todos».

Sr. Ruggieri. — Es lo que he propuesto.

Sr. Parera. — Pero no hablemos de privilegio especial.

Sr. Dickmann (A.). — Que se vote por partes. No habiendo aceptado la comisión, corresponde votar el agregado al final.

Sr. de la Vega. — Pido la palabra.

Votaré en contra del agregado porque en este estudio improvisado, que necesariamente debemos hacer sobre el mismo, entraremos en materia de por sí peligrosa, como es la referente a la preferencia en el pago de los créditos. Peligrosa en el estudio y especialmente en su aplicación. La jurisprudencia es variable y ello responde a una falta de ordenación clara en la construcción jurídica respecto de la ley de quiebras y principalmente del Código Civil que también se aplica, a tal extremo que juriscultos como el doctor Bibiloni, han dado como desiderátum de la legislación apartarse por completo de esta terrible materia de privilegios para dejar que todos corran la misma suerte, desde que en definitiva tanto el locador de la casa como el empleado, como el hombre

que entrega su dinero o su mercadería sin que se le pague un centavo, todos han sido llevados por la confianza que tenían respecto de su deudor.

Yo no tendría inconveniente en que se reconociera un privilegio; es lo que creo corresponde, pero en el mismo concepto del privilegio con que dentro de la ley de quiebras se encuentra beneficiado el empleado por el pago de sus haberes. Pero no colocarlo por encima de los privilegios especiales que tienen características propias como es el caso del acreedor de dominio, del hombre que le entrega una mercadería al comerciante y que por el hecho de no haberle pagado el precio o por habersele entregado en forma simbólica, es considerado por la legislación vigente como un hombre que tiene derecho de retirar esa mercadería de la liquidación de la quiebra de su deudor.

Sr. Parera. — Derecho de reivindicación.

Sr. de la Vega. — Hago estas observaciones que traducen dudas y como no deseo apoyar una sanción que pudiera ser equivocada por la forma improvisada del debate y por la dificultad de la materia misma, me decidí prudentemente a no adherir a la proposición del señor diputado por la Capital.

Sr. Parera. — Sería lo más práctico, porque de otra manera vamos a hacer confusión.

Sr. Presidente (Cafferata). — Se va a votar la primera parte.

—Se lee:

Las indemnizaciones por cesantía y por falta de preaviso que corresponden al empleado no están sujetas a moratoria ni a embargo, y regirá a su respecto lo dispuesto para salarios y sueldos en el artículo 4º de la ley 11.273. Estas indemnizaciones gozarán de privilegio general sobre los bienes del deudor.

Sr. Martínez (J. H.). — Pido la palabra.

Propondré una fórmula que a mi modo de ver concilia el propósito de la comisión y las objeciones que se han

hecho. Establecer al final del apartado: «Estas indemnizaciones gozarán del privilegio establecido en el inciso 4º del artículo 94 de la ley de quiebras.»

Sr. Parera. — No resuelve nada.

Sr. Martínez (J. H.). — Sí, resuelve, porque extiende el privilegio que establece la ley de quiebras para los salarios de los factores, dependientes y demás. Y dentro del orden establecido por la ley que ha tenido en cuenta...

Sr. Parera. — Y aplican el Código Civil y el locador es preferido siempre.

Sr. Martínez (J. H.). — No van a aplicar el Código Civil tratándose de una ley comercial que es la que estamos modificando.

Sr. Parera. — No salva la dificultad que apuntó el señor diputado Ruggieri. Mejor es no decir nada.

Sr. Presidente (Cafferata). — ¿La comisión acepta el agregado propuesto?

Sr. Ruggieri. — El agregado del señor diputado por Córdoba no modifica el texto del despacho. El que yo proponía establece una preferencia, en beneficio de los empleados, para la indemnización de despido y con relación a los acreedores con privilegio especial.

Sr. Martínez (J. H.). — Mi proposición mejoraba el despacho porque no se puede establecer un privilegio general cuando el privilegio general tiene una serie de grados de acuerdo con la importancia de los servicios prestados al fallido y esa fué la observación del señor diputado por Santa Fe. No puede tener privilegio esta indemnización sobre los gastos de seguridad de los bienes, sobre los gastos funerarios o de la última enfermedad. Por eso los coloco en el mismo grado en que están actualmente los salarios y jornales de los factores y dependientes.

Se aclaraba entonces en qué colocación, dentro del privilegio general que establece el Código de Comercio, estaba el privilegio acordado a esta indemnización.

Sr. Contte. — ¿Sobre qué vamos a hacer efectivo el privilegio especial?

Sr. Ruggieri. — El locador lo hace efectivo sobre las cosas que están dentro de la casa locada.

Sr. Contte. — Me refiero al empleado.

Sr. Ruggieri. — Sobre todos los bienes del deudor, desplazando los privilegios especiales sobre determinados bienes.

Sr. Contte. — Pero no es privilegio especial, entonces; es un privilegio general al que el señor diputado da el nombre de especial.

Sr. Ruggieri. — Yo no le doy el nombre de privilegio especial, sino de privilegio general. Doy una preferencia con respecto a los especiales. De manera que tiene privilegio general sobre los bienes del deudor y al mismo tiempo preferencia con respecto a los créditos con privilegio especial.

Sr. Pinedo. — La proposición del señor diputado por Córdoba es sumamente conveniente.

Sr. Parera. — No resuelve nada.

Sr. Pinedo. — Aclara mucho, porque establece para esta indemnización un privilegio conocido y como la indemnización es de la misma naturaleza que los créditos a los cuales la ley común les ha dado ese privilegio, lógico y correcto es colocar a la indemnización en ese rango sin entrar a improvisar en la Cámara sobre preferencia entre privilegios generales y especiales, sobre todo cuando tenemos dos juegos de leyes — civil y comercial — que hacen que cualquier resolución que tomemos en este momento entrará en la terminología de la ley civil o de la ley comercial.

Es sumamente clara y conveniente la proposición del señor diputado por Córdoba y pediría a los miembros de la comisión que se pusieran de acuerdo para manifestar su conformidad con ella.

Sr. de la Vega. — Pido la palabra.

Por mi parte no tengo inconveniente en adherir a la proposición del señor diputado por Córdoba que está de acuerdo con lo que acabo de manifestar.

Se trata en este caso de acordar a la indemnización, por los motivos que establece este proyecto, el mismo privilegio de la ley de quiebras o sea

el Código de Comercio para el pago de los sueldos a los empleados de comercio.

Conceptúo que aunque no sería necesario imponerlo en nuestra legislación, es mejor preverlo para mayor claridad.

Sr. Courel. — En nombre de la mayoría de la comisión, acepto el agregado propuesto por el señor diputado por Córdoba, porque mantiene el concepto que la comisión ha querido dar a la indemnización por despido.

Sr. Parera. — Conste que no es ningún agregado porque está en el despacho. No establece el orden...

Sr. Ruggieri. — No hay necesidad de establecer el orden porque no lo alteramos, señor diputado. No voy a insistir, pero aclaro que no estoy de acuerdo con aquellos señores diputados que creen que un crédito con privilegio general tiene siempre preferencia con relación a créditos con privilegio especial.

Sr. Pinedo. — Nadie cree eso.

Sr. Contte. — No me ha entendido el señor diputado.

Sr. Briuolo. — Pido la palabra.

Deseo hacer una simple pregunta a la comisión: si, por la reforma aceptada en este momento, la indemnización será considerada en el mismo orden de los salarios que se le adeudan al empleado; si en caso de quiebra los salarios por indemnización que se adeudan al personal de empleados tienen el privilegio especial de los salarios o sueldos.

Sr. Martínez (J. H.). — Tienen privilegio general los salarios, no especial.

Sr. Briuolo. — Yo pregunto si en este caso, después de la reforma se equipara la indemnización a los salarios.

Sr. Martínez (J. H.). — Tiene el mismo privilegio.

Sr. Briuolo. — Es lo que quería saber, porque los señores miembros de la comisión han tardado bastante en ponerse de acuerdo, habiendo en ella abogados.

Varios señores diputados. — Que se vote.

Sr. Presidente (Cafferata). — Como no hay objeción a la primera parte del

apartado, la Presidencia la da por aprobada. Se va a votar la segunda parte en la forma propuesta por el señor diputado por Córdoba y aceptada por la comisión, de que se va a dar lectura.

—Se lee:

Estas indemnizaciones gozarán del privilegio establecido en el artículo 94, inciso 4º de la ley de quiebras.

—En consideración:

A los efectos de la indemnización, la antigüedad en el servicio anterior a la sanción de esta ley sólo se reconocerá hasta un límite máximo de diez años.

Sr. Aráoz (J. I.). — Pido la palabra.

Voy a votar en contra de este artículo, porque es uno de los que, por su gravedad, tengo la seguridad de que ha de obstaculizar el trámite de esta ley en su consideración por el Senado y su promulgación por el Poder Ejecutivo.

Es este, señor presidente, un artículo de carácter francamente retroactivo. El reconocimiento de diez años de antigüedad implicará para el comercio una carga de 350 a 400 millones de pesos. Y si se rebajara a cinco años, el gravamen sería siempre de 200 a 250 millones. Pero no es tanto el monto del gravamen lo que me preocupa sino los principios de orden constitucional y de orden económico que esta disposición compromete. Considero que la no retroactividad de las leyes es un precepto de orden constitucional, aunque no esté expresamente establecido, y creo también que es base esencial del régimen económico, de libertad de trabajo y de respeto a la propiedad que nos rige.

Estos son los motivos por los cuales voy a votar en contra de este artículo.

Sr. Vicchi. — Pido la palabra.

Formulo, señor presidente, al despacho de la comisión dos objeciones, una de forma y otra de fondo. Me parece que la ubicación que la comisión ha dado a la disposición que estamos considerando es indudablemente inconve-

niente. Se trata de una disposición transitoria, y corresponde por lo tanto no incorporarla al texto definitivo del artículo 157 del Código de Comercio, porque allí quedará aunque ya, por el transcurso del tiempo, no produzca efecto de ninguna clase. De manera que me parecería más lógico y conveniente que el artículo figurara entre las últimas disposiciones de la ley, en el lugar que ocupa el actual artículo 3°.

En cuanto a la observación de fondo: es sabido, señor presidente, y ya se lo ha expresado aquí el señor miembro informante de la comisión, que este apartado ha sido objeto de reiteradas críticas y esgrimiéndose argumentos de orden jurídico y exclusivamente económicos.

Me parece conveniente fijar bien los dos aspectos aludidos para que no pueda haber confusión con respecto al alcance de la disposición.

Se habla de la irretroactividad de la ley. En primer lugar, como ya lo ha señalado en forma precisa el señor diputado Ruggieri, no hay ninguna disposición constitucional que establezca en forma imperativa que las leyes no tienen efecto retroactivo. Es una simple disposición del Código Civil, en su artículo 3°, y no estableciéndolo la Constitución, como muy bien lo ha observado el tratadista doctor Salvat, los efectos son los siguientes: en primer lugar, el precepto contenido en el artículo 3° del Código Civil...

Sr. Courel. — La comisión va a aceptar el cambio de ubicación de estos incisos, como lo propone el señor diputado, de tal modo que cuando se traten esos incisos cree que es cuando debe escuchar las interesantes consideraciones que ahora está haciendo el señor diputado.

Sr. Sierra. — Sería mejor postergarlas para el momento pertinente.

Sr. Vicchi. — Sin embargo, yo creo que ganaríamos, si expusiese mis ideas en este momento.

Sr. Courel. — Muy bien, señor diputado.

Sr. Vicchi. — Decía, que el precepto contenido en el artículo 3° del Código

Civil es una simple regla de interpretación o de aplicación de las leyes. En segundo lugar, que el Congreso está facultado para reglamentar libremente por medio de disposiciones de carácter transitorio, y puede aún más, pues nada le impide dictar leyes con efecto retroactivo, porque no hay en juego ninguna prohibición constitucional. Claro está que, en ese caso, si esta facultad no se ejerce con prudencia, puede producir serios trastornos por la falta de estabilidad que se crearía para nuestro régimen jurídico; pero ello no quiere decir que la facultad no exista.

La Suprema Corte Nacional ha dado normas juiciosas con respecto a la aplicación de este principio jurídico de la retroactividad de las leyes y en tal sentido ha dicho que no puede ser retroactivamente aplicada una ley cuando ésta conduzca a violar alguna garantía constitucional, como por ejemplo, la garantía del derecho de propiedad, entendiéndose esta palabra en un concepto general aplicable a todos aquellos casos en que exista un derecho incorporado al patrimonio de las personas, sea en razón de la existencia de un contrato, o sea en virtud de una sentencia dictada a su favor. Pero es que, en realidad, en este caso no se afecta un derecho adquirido e incorporado al patrimonio de las personas cuyas relaciones rige esta ley.

Si la comisión hubiera establecido una regla fija de indemnización mayor que la que actualmente rige, a nadie se le hubiera ocurrido que sería impugnada desde un punto de vista jurídico. Igualmente, si a la comisión se le hubiera ocurrido establecer una indemnización variable, pero teniendo como punto de referencia para la indemnización el perjuicio que el empleado sufre con la rescisión del contrato y tomara, por ejemplo, como elemento de juicio la edad del empleado, el número de sus hijos, la posibilidad de encontrar un nuevo empleo y de acuerdo con estas normas regulara la indemnización, tampoco habría, es indudable, ninguna objeción de carácter jurídico. Y eso es precisamente lo

que ha hecho la comisión. Ha tomado como punto de referencia, la antigüedad, porque parte del concepto de que el empleado más viejo en el servicio sufre un mayor perjuicio cuando es despedido del empleo, es decir cuando el contrato se rescinde no por las causas previstas por la ley, sino por la voluntad de una de las partes, y de acuerdo a eso fija una escala variable con referencia a la antigüedad, para que la indemnización pueda aplicarse de acuerdo a ella.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, doctor Abraham de la Vega.

Nuestra discrepancia con el despacho deriva de un punto de vista totalmente distinto. Hay discrepancia con respecto a los efectos económicos que la medida va a producir. Consideramos que la antigüedad de diez años establecida por el proyecto que la Cámara en este momento discute, va a arrojar de improviso sobre el comercio una carga extraordinariamente pesada. De acuerdo con el régimen jurídico actual la indemnización por preaviso es sólo de un mes. Con la nueva disposición, como se pagará medio sueldo por cada año de servicio, computados los diez años serán cinco sueldos, y como al mismo tiempo se ha ampliado el término del preaviso, en el caso de que no se cumpliera la disposición respectiva, recibiría el empleado dos sueldos más, o sea siete sueldos. De manera que entre el régimen actual y el de la nueva ley la diferencia será la que existe entre un mes y siete meses de sueldo.

La situación que se va a crear al comercio es la de tener que afrontar una situación pesada, como digo, sin que tenga en este momento las reservas necesarias.

Se me dirá que el propósito del legislador y todo el principio que informa la ley es estimular la creación de cajas de previsión o bien que se recurra a los seguros, a fin de poder cumplir las obligaciones que la ley impone. Pero lo exacto es que las cajas de previsión necesitan tiempo para formarse;

no se van a improvisar; y mientras tanto el efecto inmediato de la disposición será producir las perturbaciones que señalo. Y en cuanto a los seguros — ya lo reconoció el señor diputado Dickmann — es un poco problemático que puedan las compañías actuales establecer ese seguro, porque no hay base para calcular los riesgos que se corren. ¿Cómo puede una compañía saber cuál es la situación del comercio, sobre todo en un caso de crisis económica como éste? ¿Cómo puede saber si un comerciante está, o no, en una situación difícil en un momento determinado? Y entonces va a ocurrir que en la imposibilidad de prever el riesgo las compañías no tomarán a su cargo esta clase de seguros.

Por otra parte, es oportuno señalar que la ley no se refiere en este caso de indemnización por despido, exclusivamente a la rescisión del contrato en una forma arbitraria. Se refiere a una cantidad de otros supuestos que no responden ni dependen de la voluntad del empleador. Pongo como ejemplo el caso de un negocio que no prospera y que el patrón desea liquidar. La liquidación será totalmente imposible, porque siendo las indemnizaciones que deben pagarse por ese concepto tan serias, tan importantes, es más lógico que el empleador espere tranquilamente la convocatoria o la quiebra, ya que de todos modos está condenado a no salvar el capital en giro.

Por otra parte, el reconocimiento de la antigüedad por plazo tan largo, va a producir, como he dicho, el recargo o la creación de un pasivo que no ha podido ser previsto, y la creación de ese pasivo influirá indudablemente en el crédito del comerciante. Señalo este hecho porque en una época de angustia económica como la que se está pasando en este momento, la restricción del crédito de los comerciantes sería algo sumamente grave y perjudicial.

En concreto, entonces, al proponer que la fijación del plazo se limite a cinco años, tratamos de evitar los efectos inmediatos, de extrema gravedad, que puede producir un plazo mayor. Creemos que en esta forma se contem-

plan los dos aspectos que el legislador está obligado a tener en vista: por una parte la capacidad económica de los empleadores y por la otra la defensa de los empleados, ya que el tiempo al transcurrir irá restableciendo la vigencia de la escala en todos sus efectos, y sin producir perturbaciones que traerían graves consecuencias en la vida económica del país.

Planteo, pues, la modificación concretamente en estos términos que irían como artículo 3° de las disposiciones de la ley: «A los efectos de las indemnizaciones establecidas por el artículo 157 del Código de Comercio, la antigüedad en el servicio anterior a la sanción de esta ley sólo se reconocerá hasta un límite máximo de cinco años».

Nada más.

Sr. Bunge. — Pido la palabra.

He votado este proyecto y colaborado en su discusión por creer, a pesar de que la comisión se ha excedido en sus propósitos en la forma que voy a indicar después, que una ley es una disposición de carácter permanente, y los perjuicios que puede ocasionar debido a las circunstancias son transitorios, y no pueden influir decisivamente sobre el criterio de la sanción.

Entiendo que en una época de crisis como la actual es materialmente imposible, dentro de las leyes económicas del régimen capitalista obtener, por una sanción legal, beneficios equivalentes a un aumento de sueldos y salarios, cuando todo presiona a su rebaja. Creo, por consiguiente, que será posible a las empresas de comercio que se encuentran afectadas por la crisis eludir los aumentos de prestaciones que implican algunas de estas disposiciones, mediante rebajas de sueldos y salarios equivalentes a su valor. Esa razón no puede movernos a perder la oportunidad de sancionar un principio que considero de capital importancia, pero debe movernos a ser prudentes en cuanto a los límites a que debe llegarse. Y uno de ellos es precisamente el límite de la antigüedad inicial desde el momento que de él de-

pende el monto de los gravámenes más inmediatos que puede sufrir el comercio en esta época.

Es notorio que las transacciones comerciales se han reducido a menos de la mitad de lo que eran en años anteriores y que, a causa de ello, muchas empresas han tenido que despedir a una parte considerable de sus empleados, y otras los ocupan con jornadas o con sueldos reducidos.

Si nosotros, en esta sanción, establecemos un derecho de indemnización por despido que implique virtualmente cinco meses de sueldo, por necesidad de la reducción de las transacciones, corremos el riesgo de acelerar la política de despido que ya han iniciado numerosas casas comerciales. Creo que es indispensable que esta disposición de transición — como ha sido bien definida y lo es en realidad — tenga tales características que permita a los establecimientos comerciales adaptarse gradualmente al nuevo régimen legal, y que, por lo tanto, es suficiente multiplicar por dos y medio la indemnización a que tienen actualmente derecho los empleados de comercio. Multiplicándola por cinco me temo que incidirá sobre los propios aparentes beneficiarios.

Es esa una razón de importancia, basada en hechos reales. Muchos conocidos me han informado que temen ser despedidos por causa de esta ley. Por ejemplo, existen establecimientos comerciales con imprentas anexas que, según se me ha informado, tienen personal que por trabajar sólo de 14 a 16 días al mes ganan 160 pesos, cuando su salario normal era de 300 pesos mensuales.

En tales condiciones, me parece que sería verdaderamente imprudente que por ley se pretenda aumentar de hecho los salarios con beneficios equivalentes a aumentos, sin considerar la cuestión económica que es la más fundamental, y la que más consideran los establecimientos comerciales. Por esa circunstancia de hecho, creo que para que esta ley cause el menor número de perturbaciones al iniciarse, y hasta

para que motive menos protestas y obstáculos en ciertos círculos, debemos ser prudentes en esta disposición de transición, reduciendo esta antigüedad de cinco años. De todos modos, en poco tiempo, los empleados de comercio estables conseguirán los beneficios íntegros de la ley.

No veo por eso ninguna razón de urgencia para plantear bruscamente un contraste tan grande con lo que rige en la actualidad, y caben razones de prudencia, en beneficio de los propios empleados y obreros de los establecimientos comerciales, para proceder gradualmente.

Nada más.

Sr. Dickmann (A.). — Pido la palabra.

Una de las modificaciones más esenciales que va a tratar la Honorable Cámara, en esta ley, es la que en este momento acaba de formular el señor diputado por Mendoza apoyada por el señor diputado por la Capital.

Los artículos votados hasta ahora acuerdan beneficios en realidad reducidos aun cuando algunos importantes. Lo que ha movido a los autores de esta ley — y digo autores porque somos varios — fué precisamente, establecer un régimen de previsión social que no permita a un empleado después de treinta años de servicio, por ejemplo, ser arrojado como un estropajo inútil después de haber pasado toda su vida dedicado a cimentar la prosperidad de la casa comercial en donde trabaja. (*Aplausos*).

Los proyectos de ley hasta ahora presentados a la Cámara, todos ellos sin excepción, y por eso no temo el término de «demagógico» ya lanzado varias veces en el debate...

Sr. Bunge. — Yo no lo he lanzado.

Sr. Dickmann (A.). — No me refiero al señor diputado sino al señor diputado Sierra. No temo ese término porque todos los proyectos de ley desde el proyecto del doctor González Iranain en nombre del grupo socialista entonces unido; el proyecto del doctor Miguez; el proyecto del doctor Guillot; el proyecto mío y el propio proyecto del

señor González Masada, todos ellos conceden un mes de sueldo por cada año de servicio.

Sr. Ruggieri. — Sin limitación de tiempo a la antigüedad.

Sr. Bunge. — Pero en épocas normales.

Sr. Dickmann (A.). — A eso voy, porque considero que estamos en el corazón mismo de la ley.

Por mi parte, queriendo hacer una ley viable y socialmente útil, y recogiendo las observaciones del debate de 1928 he traído reformas fundamentales a los despachos anteriores. La primera ha sido recogida ahora en el despacho actual de la comisión; me refiero a la limitación del monto del sueldo para gozar los beneficios de esta ley. No he tratado de beneficiar a los altos empleados de las casas de comercio, a los gerentes y a los jefes.

Lo que nos preocupa a nosotros, los socialistas, es la suerte de los empleados modestos, de los que no por falta de previsión, señores diputados, sino por falta de elementos para hacerlo, no pueden asegurar su porvenir mediante el ahorro. ¿Quién puede afirmar que un sueldo medio de 160 pesos, que es más o menos el que rige en el comercio del país, puede ser un salario suficiente para mantener una familia y además formar el patrimonio de previsión?

Este proyecto tiende a formar un ahorro obligatorio, la única previsión en momentos en que es arrojado a la calle por razones que muchas veces no son imputables al propio factor de comercio, sino a las circunstancias.

Reducida la ley a los sueldos hasta 500 pesos, ¿qué es lo que ofrece de tan exorbitante para despertar tanta resistencia?

Sr. Vicchi. — ¿Si me permite el señor diputado una interrupción?

Sr. Dickmann (A.). — Al señor diputado todas las que quiera y con mucho gusto.

Sr. Vicchi. — No está reducida a los sueldos de 500 pesos, sino que establece que sólo podrá pagarse una indemnización hasta 500 pesos.

Sr. Dickmann (A.). — Yo me refiero a mi proyecto. La comisión va en realidad hasta los sueldos de mil pesos. En esa parte me permito disentir con la comisión.

Sr. Ruggieri. — La comisión no establece ningún límite respecto a los sueldos.

Sr. Dickmann (A.). — Tampoco lo establecía el proyecto pero decía que sólo era aplicable hasta 500 pesos mensuales.

Sr. Ruggieri. — Eso es otra cosa.

Sr. Dickmann (A.). — ¿Qué es lo que establece este despacho en materia de indemnización?

Reducida a medio mes por cada año de servicio y si se limitara la antigüedad a cinco años, en definitiva lo que se les otorga a los empleados serían dos sueldos y medio en lugar de uno como en la actualidad. Si fuera despedido un hombre con 30 años de servicios, que tuviera 160 pesos de sueldo, se le daría en compensación por todos sus esfuerzos y desvelos la suma de 400 pesos. Esto es, reducido en cifras, lo que ofrece la ley.

Lo menos que podemos hacer, señores diputados, es aceptar el despacho de la comisión subscripto por todos, que extiende la antigüedad a diez años.

Llamo la atención sobre este nuevo método de subscribir despachos en materias tan esenciales como ésta, en que no consta la disidencia y se la trae solapadamente bajo el poncho, al recinto.

Otra de las razones que me da autoridad para sostener con calor que no se reduzca a cinco años los diez de antigüedad adoptados por el despacho, es el sistema del seguro que yo establezco y que considero esencial. No participo de las dudas de los señores diputados. He admitido, en la interrupción que me permitió el señor diputado por la Capital doctor Sierra, que el seguro por despido es un tanto más difícil.

El seguro de despido será inmediatamente establecido. ¿Quién puede dudar de ello? ¿Quién puede dudar de la capacidad administrativa y técnica

del comercio en general, cuando de la defensa de sus intereses se trata? ¿Cómo hemos de suponer que los comerciantes no encuentren técnicos y actuarios que puedan hacer un estudio, que no es imposible, del despido medio anual para calcular el valor de las primas?

Para que la ley sea realmente efectiva, para que la ley pueda realizarse y tenga aplicación, es indispensable el complemento del seguro, y yo celebro que el despacho de la Comisión de Legislación, aunque en forma no obligatoria como lo establecía el proyecto, adopte el seguro como garantía subsidiaria de las obligaciones de los principales para con sus empleados y obreros.

Creo, señor presidente, haber desmontado esta disidencia, formulada ante un Congreso que ha votado leyes de jubilaciones que al día siguiente reconocían el derecho de antigüedad máxima exigida. ¿Acaso no hemos votado las leyes de jubilación de ferroviarios, de bancarios, de tranviarios? ¿Esas leyes han establecido alguna limitación a la antigüedad anterior? Al día siguiente de estar sancionadas, un bancario o un ferroviario, podía probar los treinta años de servicios exigidos y pedir la respectiva jubilación.

Sr. Vicchi. — Las leyes de jubilaciones establecen una carga para el Estado y para los mismos beneficiados y la que nos ocupa establece una carga exclusivamente para un gremio y en la mayoría de los casos para un individuo solo.

Sr. Dickmann (A.). — Está en un grave error el señor diputado. Todas las leyes de jubilaciones han establecido una carga que en definitiva pesa sobre el consumidor. La luz eléctrica, el teléfono, el gas, han sufrido un recargo de precio para pagar las jubilaciones exactamente como se va a producir un alza en los precios de los artículos para costear estas nuevas mejoras en el trabajo de los factores del comercio.

El señor diputado por Mendoza, que es de una provincia que sufre tarifas agobiadoras, ¿no ha advertido, acaso,

que éstas han aumentado en razón de la sanción de la ley de jubilaciones? ¿O somos niños para creer que se pueden otorgar estas cosas sin que alguien las pague?

Sr. Vicchi. — No me ha contestado la objeción el señor diputado.

Sr. Dickmann (A.). — De manera, señor presidente, que tranquilamente podemos votar el despacho sin temor de que se produzcan los cataclismos que se anuncian y que yo no veo por ninguna parte si el comercio sabe defender sus legítimos intereses mediante la colaboración del seguro mutual o simplemente mediante el pago de primas a compañías de seguros que se establezcan para este riesgo.

Para no hablar dos veces, por razones de salud, pido a los señores diputados y al señor presidente me excusen que funde a continuación la otra disidencia anunciada por el señor diputado por la Capital, doctor Sierra, ya que a él se le ha permitido hacerlo fuera de oportunidad.

Sr. Ruggieri. — Es una disidencia personal, porque sobre ese punto la comisión mantiene su despacho, como lo habrá advertido el señor diputado.

Sr. Dickmann (A.). — Así lo he entendido. Yo me refiero a la disidencia del señor diputado Sierra y del señor diputado por Mendoza.

Sr. Sierra. — Los señores diputados Abalos y de la Vega, miembros de la comisión comparten esa disidencia, de la cual se conversó en la comisión, pero sin concretarla.

Sr. Dickmann (A.). — Pero en el recinto fué el señor diputado quien la anunció, y yo no puedo referirme sino a lo que conozco.

Sr. Ruggieri. — En el seno de la comisión y en el recinto los diputados socialistas que formamos parte de ella hemos ratificado nuestra adhesión a esa parte del despacho.

Sr. Dickmann (A.). — El señor diputado socialista independiente por la Capital es al parecer el intérprete no sólo de su propia oposición, sino también de la de los señores diputados por Tucumán y por Santiago del Estero.

La ley, señor presidente, como se proponía un fin social, es decir, establecer el mínimo de seguridad que se debe otorgar a un hombre para que trabaje con el mínimo de tranquilidad, se ocupa del despido forzoso y del fallecimiento. Para la familia de los factores del comercio es esencial tener una indemnización cuando la muerte del jefe implica la desaparición de todo recurso. Por eso extendiendo la misma indemnización del despido, al fallecimiento, en beneficio de los derechohabientes tales como la esposa, los hijos menores y los padres que por la edad están a cargo del empleado fallecido.

El señor diputado por la Capital cree que eso debe eliminarse del despacho. Ya le he oído decir lo mismo en el seno de la comisión, cuando tuve el honor de ser invitado por ella para manifestar mis opiniones, y entonces les dije que la ley sería herida de muerte si se le quitaba esta previsión. Porque esta ley, en definitiva, señor diputado por la Capital, ¿a qué quedaría reducida?, a aumentar a dos meses y medio lo que ahora es un solo mes de indemnización por despido.

Francamente, no valía la pena hacer tanto ruido ni valía la pena conmover tanto la opinión ni hacer gastos tan cuantiosos como los que ha hecho el comercio con los costosísimos avisos para combatir esta ley a la que presentaban como el «desastre del comercio de este país». ¡Cómo si fuera una ley nueva en la legislación del mundo!

Este artículo que introduje en mi proyecto, tampoco es inventado por mí; lo he sacado de las leyes citadas acá por los señores miembros informantes de la comisión. La ley peruana, la ley chilena y la ley italiana, se refieren a la indemnización por fallecimiento. Ni el comercio italiano, ni el peruano ni el chileno han sufrido otros desequilibrios que los naturales que ha producido la crisis universal.

De modo, pues, señores diputados, que no hay que asustar de esa manera a la opinión pública y a la Cámara con sanciones que no tienen la gravedad

que se les quiere dar: la ley quedaría mutilada, sin significación si se redujera a medio mes de indemnización por cada año y si la antigüedad sólo se computara en cinco años.

Esas son las razones que he querido dar en la forma breve como lo puedo hacer hoy, por razones visibles, para sostener el despacho de la comisión, que en esta materia está mucho más cerca del proyecto primitivo que la proposición del señor diputado Sierra.

Nada más. (*Aplausos en la barra*).

Sr. Presidente (de la Vega). — Prevengo a la barra que está prohibido hacer toda clase de manifestaciones.

Sr. Bunge. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (de la Vega). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba, que la había solicitado con anterioridad.

Sr. Courel. — En mi carácter de miembro de la Comisión de Legislación, he recogido algunas observaciones formuladas por el señor diputado Vicchi, ya que me he de referir directa y concretamente al punto que el señor diputado Vicchi ha planteado y que es el único motivo de la discusión en este momento. No me he de referir a la situación del comercio planteada por el señor diputado Bunge, ni tampoco a los casos tocados por el señor diputado Dickmann que se refieren al fallecimiento.

El señor diputado Vicchi, con una comprensión exacta, a mi juicio, de lo que es retroactividad, ha contestado al señor diputado Aráoz cuál es el concepto con que puede legislar este Congreso en materia de retroactividad. No hay disposición constitucional alguna, ni nadie puede negarle facultades a este Congreso para dictar leyes que aceptan el principio de la retroactividad. Más en esta ley que se declara expresamente que es de orden público y de cumplimiento ineludible.

El señor diputado Vicchi, fundando su moción en el sentido de limitar más esa mal llamada retroactividad, nos ha dicho que existen dos argumentos: uno de orden social y otro de orden econó-

mico. Comparto totalmente el primero desde que reconoce como justo y equitativo que la indemnización por despido no pueda ir a perjudicar los derechos adquiridos de ese empleado, que en desempeño de su función ha consagrado la mayor parte de su vida.

Sr. Vicchi. — En ningún momento he afirmado que la antigüedad es un derecho adquirido y voy a sostener eso para refutar al señor diputado.

Sr. Courel. — En todo caso, después de la advertencia que me hace...

Sr. Vicchi. — ¿Si me permite que le precise el concepto?...

Dije que me parecía equitativo y justo que la comisión, en la necesidad de tener una referencia para la escala variable de las indemnizaciones, la buscara en la antigüedad.

Sr. Courel. — Es lo que dije: que bajo el aspecto social el señor diputado Vicchi había reconocido que el despacho era justo y equitativo al fijar diez años de anterioridad para la vigencia de esta ley.

Pero quiero referirme en concreto al argumento de orden económico. Es necesario que quede bien fijado el alcance de la retroactividad.

Cuando la comisión la ha limitado a diez años, no ha hecho nada más que favorecer la situación patronal, porque de no haber dicho el inciso que esta ley otorgaba beneficios a los empleados de comercio con diez años de antigüedad en el servicio, hubiese significado la vigencia de la ley en todo el tiempo anterior a su promulgación.

En concreto, la retroactividad no existe, desde que no se otorga ningún derecho adquirido en el pasado. A mi juicio la palabra retroactividad está mal empleada. Se limita el beneficio de que los empleados pudieran gozar en el futuro y fija una fecha cierta y precisa a partir de la cual ha de contarse la aplicación de la ley. La limitación, por consecuencia, es beneficiosa para los intereses comerciales que tuvieran que hacer frente a las situaciones de despido.

—Reasume la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Juan F. Cafferata.

La limitación de diez años se hace precisamente en defensa de ese interés social de los empleados que teniendo veinte y treinta años de servicios, mañana — creyéndose que esta ley perjudica a los intereses comerciales — pudieran ser declarados cesantes de inmediato. Y a ese empleado con veinte o treinta años de servicios la única compensación que le correspondería es la de cinco meses de sueldo.

Sr. Dickmann (A.). — ¿Si me permite?...

Una circunstancia más que hará menos onerosa la ley es ésta: cuanto mayor sea la indemnización que tenga que pagarse por despido, menos despidos habrá.

Sr. Courel. — Es exacto.

Sr. Dickmann (A.). — Esta va a ser una ley de estabilidad del empleado.

Sr. Courel. — Lo que ha querido la comisión, teniendo en cuenta la situación general del comercio, ha sido resguardar al empleado y al patrón, sobre todo en este caso al patrón, limitando los efectos de la ley a una fecha cierta, y que al mismo tiempo asegure la estabilidad del empleado que tiene más años de servicio, reconociéndole humanamente un mínimo de diez años.

El perjuicio de orden económico que pudiera sufrir el comerciante debe hacer volver el argumento hacia el perjuicio de orden económico que pueda sufrir el empleado si es que mañana, después de promulgada esta ley, se hiciera efectiva la sanción que ella con-signa.

¿Por qué no se contempla la situación del empleado? Este artículo no favorece la situación de los empleados de comercio. Los perjudica porque dentro de las condiciones de ley de orden público esta disposición limita, cercena la facultad. De manera que con estas palabras dejo planteada la cuestión en la forma cómo la comisión la entiende y la entrego a la Cámara para que decida respecto de la propo-

sición del señor diputado Vicchi, que en realidad perjudica más la situación del empleado y beneficia más la situación del patrón, la que nosotros hemos querido también en este caso guardar. (*Aplausos en la barra*).

Sr. Presidente (Cafferata). — La barra no debe hacer manifestaciones en ningún sentido. Por segunda vez la Presidencia lo advierte.

Sr. Bunge. — Pido la palabra.

Comprendo muy bien que el propósito de la indemnización por despido es estabilizar a los trabajadores de las empresas comerciales, y en tal concepto la he votado. Pero debe reconocerse que en una época como la actual, ese propósito puede resultar anulado en la práctica, si se excede a lo que es posible realizar en la situación económica del mundo y del país.

Me parece que es un mal precedente el que ha citado el señor diputado por la Capital, autor del proyecto que contiene esta disposición, cuando se ha referido a las leyes de jubilaciones votadas en el Congreso, por la mayoría irigoyenista, contra el voto socialista.

Al discutirse las reformas a la ley de jubilaciones ferroviarias me tocó, en representación del grupo socialista, entonces unido, el desagradable papel de combatir la ola, la fiebre, casi diría el delirio jubilatorio que había afectado a la mayoría de los empleados y obreros ferroviarios, quienes querían la supresión del límite de edad, la reducción a 25 años del mínimo de tiempo de servicios, la jubilación mínima y la pensión mínima.

Conseguimos salvar con nuestra oposición, por lo menos, el límite de edad, y el mínimo de años de servicios.

Pocos años después, se han realizado todos los pronósticos que debí hacer, sobre la base de un estudio serio de la cuestión; y vemos hoy, señor presidente, que los propios obreros, ferroviarios, representados por su organización gremial seria y responsable, piden una reducción de los beneficios de la Caja, al haber verificado que el plan vigente ha determinado, en el escaso tiempo transcurrido, un déficit matemático de cerca del mil millones de pesos, el cual

significa que la Caja debería tener, para poder sostenerse, entradas anuales por valor de cincuenta millones de pesos en más que las que tiene.

Me tocó también el desagradable papel de denunciar el carácter antieconómico y perjudicial que tenía para los trabajadores bancarios la ley llamada básica, que estableció el sistema de contribución obligatoria sin ningún plan de beneficios.

La sanción de esa ley por la mayoría irigoyenista contra el voto socialista, tuvo por resultado inmediato, desde que se efectuó esa sanción en época en que el país todavía sufría los colazos de la crisis mundial del año 20-21, — que se transportó aquí con el atraso de dos años, que el diputado Pinedo ha hecho notar que se registraba en las crisis anteriores, — dicha sanción tuvo por resultado que las empresas bancarias que estaban más comprometidas en sus finanzas rebajaran los sueldos del personal en proporción mucho mayor que los aportes que ellas debían hacer a la Caja. Recayó, pues, sobre el nivel de vida de los trabajadores bancarios, y en mayor proporción, el suplemento virtual de sueldo que establecía la ley.

También me tocó el papel de combatir esa ley 11.289, que calificó de bodrio jubilatorio; y me tocó desempeñar ese papel en condiciones que me lo hacían personalmente desagradable: con una barra entusiasta, y a los pocos días de haber realizado los empleados de comercio una gran manifestación que, según algunos, alcanzó a 50.000 personas. Pero, sancionada la ley, fué tan evidente en la conciencia de todos los trabajadores del país que su propósito era acordar jubilaciones exorbitantes a los empleados de carrera de más altos sueldos en perjuicio de la masa de empleados modestos y de los obreros, que los mismos que habían pedido la ley se levantaron para exigir su derogación, y la ley quedó muerta en seis meses de aplicación.

Sr. Dickmann (A.). — Si me permite el señor diputado...

El señor diputado, si no me equivoco, subscribió, junto con el señor dipu-

tado González Iramain, el proyecto acordando un mes de sueldo por cada año de servicio.

Sr. Bunge. — Así es, pero es muy diferente, señor diputado: se trataba de una época económica normal. Y es lo que he dicho: no estamos en una época económica normal, estamos ante la grosera evidencia de que el comercio ha reducido sus transacciones a la mitad, por lo que ya ha reducido su personal; además, mucho personal trabaja a sueldo reducido. De modo que nos exponemos a que recaiga sobre el personal que queda cualquier aumento de sueldo decretado por ley y que sea contrario a la brutal ley económica del mundo capitalista, a la lucha feroz de intereses individuales, que no pueden ser controlados dentro del régimen capitalista.

Sr. Dickmann (A.). — No se olvide el señor diputado que se ha tenido en cuenta esa circunstancia y se ha limitado a medio mes por cada año y a cinco años.

Sr. Bunge. — He hecho notar que, a pesar de temer que cause perjuicio inmediato al personal que la ley quiere beneficiar, la he votado, porque la ley es de carácter permanente y no podemos tener en cuenta circunstancias transitorias.

He dicho también — y la observación del señor diputado me obliga a reiterarlo — que esas circunstancias que debemos desear que sean transitorias y que no se agraven hasta hacerse catastróficas, deben imponernos un criterio de prudencia, para que no resulten perjudicados los aparentes beneficiarios.

Vuelvo, señor presidente, al tema que estaba desarrollando.

Después de la ley de promesa de jubilación a todos los gremios, o poco antes de ella, la Cámara presenció un curioso espectáculo que es necesario recordar: en nombre del grupo socialista, me tocó fundar una proposición de aumentar el salario mínimo de los obreros del Estado, que por la ley de presupuesto era de cien pesos mensuales, a ciento cincuenta pesos mensuales, basada esa proposición en el au-

mento del costo de la vida. Presentada en su momento oportuno, cuando no había crisis económica ni crisis financiera, la proposición fué rechazada por la enorme mayoría irigoyenista. Pero, como era seriamente fundada, fué recogida inmediatamente por toda la masa obrera del país, y en primer lugar por los trabajadores del Estado, y al mes siguiente — porque se trataba de votar duodécimos — sucedió que los mismos diputados que habían rechazado como algo absurdo el salario mínimo de 150 pesos, proponían el salario mínimo de 200 pesos. Y se produjo entre ellos mismos un verdadero remate: hubo postores y hasta por 250 pesos. Pero el buen sentido del grupo socialista consiguió que se sancionara el salario mínimo vigente en la actualidad, de 160 pesos.

Quiere decir, señor presidente, que soy consecuente con todos los puntos de vista que he sostenido en mi vida política. Debemos atenernos a la realidad de las cosas, y conducir nuestros deseos sólo en la dirección en que la realidad puede hacerlos realizables.

Entro ahora al fondo del asunto, señor presidente.

Queremos la sanción de esta ley, para estabilizar al personal del comercio por la indemnización de despido, para que no pueda ser despedido a capricho; pero no podemos confundir el derecho moral y el derecho, yo diría material, que tiene todo trabajador a no ser privado de su trabajo en ninguna época de su vida, sin ninguna razón que lo justifique, con los derechos de la pretendida antigüedad. Los derechos de la pretendida antigüedad, señores diputados, son un residuo del viejo paternalismo medieval, de premiar al «servidor fiel» del patrón, y en este caso hay que decir «patrón», subrayando la palabra.

La antigüedad no acuerda derechos especiales. Los derechos especiales los acuerda la «edad». Es una iniquidad que el empleado u obrero anciano puedan ser arrojados como una piltrafa a la calle; pero de esa iniquidad no es culpable el empleador individual que lo hace, porque él está sometido a la

dura ley de la economía individualista. De esa iniquidad es culpable la sociedad en su conjunto, y no puede por lo tanto la sociedad pretender hacer responsable al empleador individual sino que debe hacerse responsable ella misma, toda la comunidad.

Ese derecho social de la edad y de la enfermedad debe, pues, estar garantizado del único modo en que puede estarlo efectivamente, que es por el seguro social.

No puede garantizarse por derechos especiales acordados a los empleados de determinadas ramas de la producción, sobre todo cuando no gozan de este beneficio los más numerosos.

Yo conozco una sola ley, que en su texto establece como un derecho real la antigüedad del obrero y del empleado, y es la ley de rentas de vejez sancionada en Finlandia por el partido que dominó por la sangre y por el hierro al movimiento socialista, para destruirlo. Allí solamente tienen derecho al retiro por edad los servidores fieles que hayan servido 25 ó 30 años a un mismo patrón. Habla la ley de «servidores.»

No confundamos, pues, las cosas; no confundamos los derechos de la edad, de la enfermedad, de la invalidez causada por accidente, con los derechos de la antigüedad, que creo que no tienen razón lógica de ser en una ley, sino en el sentido...

Sr. Ganza. — ¿Me permite señor diputado?

Sr. Bunge. — ...de que un empleado ha trabajado mayor tiempo en una empresa, ha demostrado por ese solo hecho...

Sr. Ganza. — Quería hacerle notar...

Sr. Bunge. — ...que es apto para el puesto, sería injusto despedirlo. Este es el valor que tiene la aptitud demostrada en el trabajo por la antigüedad, que es la que crea el derecho moral a que me estoy refiriendo.

Sr. Ganza. — Todos los obreros ferroviarios han conseguido sus escalafones con derecho a la antigüedad.

Sr. Bunge. — Yo preveía ya las palabras del señor diputado.

Sr. Ganza. — Precisamente, por eso le pedía la interrupción.

Sr. Bunge. — El señor diputado me sale con un domingo siete.

No se premia la antigüedad de los obreros ferroviarios con el escalafón, y es extraordinario que sea un obrero el que diga eso. Lo que se hace con el escalafón no es premiar antigüedades de ninguna clase, sino acordar la oportunidad de ejercer aptitudes demostradas en el trabajo a individuos que las han adquirido en él. Es equivalente al diploma de médico.

Sr. Ganza. — Y eso es lo que han demostrado los empleados de comercio.

Sr. Bunge. — Es lo que acabo de decir. La interrupción del señor diputado estaba enteramente de más. Lo que vale de la antigüedad es la prueba de las aptitudes y de las condiciones.

Sr. Dickmann (A.). — El hombre que se agota en el trabajo ¿adónde debe recurrir?

Sr. Bunge. — A la pensión de la vejez.

Sr. Presidente (Cafferata). — Sírvanse no dialogar los señores diputados.

Sr. Dickmann (A.). — ¿Pero a cuál?

Sr. Bunge. — A la ley general de jubilaciones de todos los trabajadores. Eso es lo que se debe sancionar.

En suma, señor presidente, ha sido magnificada una cuestión que, como he dicho, es simplemente de oportunidad. Hemos sancionado el principio del derecho a indemnización en proporción al número de años de servicios, y no por creer que hay que premiar en esa forma al empleado, sino para impedir el despido caprichoso de un trabajador que ha probado sus aptitudes, por el hecho de haber trabajado mucho tiempo.

Sancionando ese principio, es necesario tratar de salvarlo en los hechos, y la manera de salvarlo es darle esta primera aplicación con criterio prudente, atendido a las circunstancias del momento. Mucho me temo, señor presidente, que los empleados que se creen los beneficiaría una ley tal como la

proyectamos en tiempos normales, de acreditar la antigüedad sin límite con respecto al derecho a la indemnización por despido superior a la que puede resistir la situación de los empresarios del comercio, lamentarán después esa sanción, porque habrían sentido lo que ocurre siempre en el mundo capitalista y lo habrían sentido en su propia carne: que será de ellos mismos, de su nivel de vida, que tendrá que salir ese aparente beneficio.

Nada más.

Sr. Vicchi. — Pido la palabra.

Me interesa, señor presidente, dejar bien establecido que percibo perfectamente cuál es la posición en el debate de los que sostenemos la necesidad de restringir en la aplicación inmediata de la ley, las indemnizaciones que en los casos de despido la misma fija. No se me escapa que la posición simpática, sobre todo para los empleados, que por un espejismo, al que me voy a referir después, creen ser beneficiados con una ley que les acuerde el mayor número de prerrogativas, aunque sean inaplicables, percibo, he dicho, que la posición simpática está del lado contrario. No quiero hacer un agravio a los que disienten conmigo, pero sí reclamo el derecho de que las razones que damos para sostener que la aplicación inmediata de la ley en los términos propuestos traería graves perjuicios en la economía nacional, sean escuchadas con ecuanimidad y con el respeto que imponen opiniones sinceras, aun cuando se discrepe con ellas.

Sr. Dickmann (A.). — Con todo respeto, señor diputado, pero le quiero hacer notar que es la comisión la que ha despachado diez años, para que el debate se limite al despacho de la comisión.

Sr. Vicchi. — A eso voy, señor diputado.

En cuanto a la comisión y al señor diputado Adolfo Dickmann, yo he observado que en el argumento sobre la antigüedad incurren en una verdadera dualidad de criterio. La comisión — opinión que yo comparto — decía cuando se trataba del monto de las

indemnizaciones, que se aplicaban en atención a la antigüedad (y que perjudicaba a los empleados) no hay derecho retroactivo de la ley; hay simplemente un criterio para fijar la indemnización. Pero esa misma comisión que nos sostiene que no hay tal derecho retroactivo — opinión que como he dicho comparto — pretende establecer que la antigüedad es un derecho adquirido e incorporado al patrimonio de los empleados, cuando no existe hasta este momento ninguna disposición legal que la haya tenido en cuenta.

Sr. Courel. — Si me permite el señor diputado...

Le he manifestado...

Sr. Vicchi. — El señor diputado empleó textualmente las palabras «derecho adquirido».

Sr. Courel. — Exactamente, porque la antigüedad en el servicio es un derecho adquirido. Otra cosa no puede ser.

Sr. Presidente (Cafferata). — Sírvanse no dialogar los señores diputados.

Sr. Courel. — Es para explicar y me ha aceptado la interrupción el señor diputado.

He manifestado que no existe retroactividad en los beneficios de esta ley en cuanto se refiere al pasado, se ha querido limitar esos beneficios. La retroactividad estaría en el caso siguiente: si un empleado declarado cesante en su puesto hace 2, 3 ó 5 años, pretendiera cobrar una indemnización por despido, ésta sería una ley retroactiva si reconociera tal derecho, pero eso no puede suceder en esta ley, con la incorporación de la cláusula que se discute y solamente prevé la disposición para el futuro, un beneficio de diez

años. Imagine el señor diputado en dónde está la retroactividad.

Sr. Vicchi. — Pero precisamente el señor diputado hablaba de que el empleado antiguo tiene un derecho adquirido a una mayor indemnización.

Sr. Courel. — Es el concepto social, señor diputado.

Sr. Groppo. — Pido la palabra, para una moción de orden.

Tengo entendido que van a intervenir muchos oradores en el debate. La hora es avanzada y nosotros tenemos el compromiso de una reunión política. Como no queremos demorar la sanción de esta ley, escuche la Cámara la proposición que vamos a formular: pasar a cuarto intermedio hasta mañana para comenzar la sesión con este asunto. Quiere decir, señor presidente, sin discursos electoralistas, pero con toda la buena intención de hacer una ley sana y una ley honesta, que mañana a primera hora estaría sancionada esta ley. (*¡Muy bien!*).

De manera que propongo a la Honorable Cámara pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 15 y 30, para comenzar con este asunto, suspendiendo los asuntos entrados y para pasar en seguida a la cuestión del sufragio femenino.

Sr. Iribarne. — Podríamos terminar ahora.

Sr. Presidente (Cafferata). — Se va a votar la moción de pasar a cuarto intermedio.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Cafferata). — Invito a los señores diputados a pasar a cuarto intermedio hasta mañana.

—Era la hora 20 y 53 minutos.

contienen preceptos puestos en vigor por la legislación obrera del país.

En cada sesión de la conferencia, señor presidente, son considerados los progresos realizados por las ratificaciones que ascienden actualmente, según los últimos informes, a 466. Los delegados argentinos en tales circunstancias, encuéntrase en una situación particularmente incómoda y les resulta imposible explicar satisfactoriamente la pasividad del gobierno argentino, difícilmente igualada por otro país de la importancia económica de la Argentina entre los 57 Estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo.

La Legislación Internacional del Trabajo representa un freno a la competencia económica que el capitalismo crea entre los Estados, competencia cuyas consecuencias la sufre ante todo la clase trabajadora en forma inmediata sobre su nivel de vida y en sus condiciones de trabajo, y en forma mediata por las cargas de la paz armada y el flagelo de la guerra. Es, por otra parte, un medio racional para que los Estados puedan, en acuerdos sucesivos dar satisfacción a las justas reivindicaciones obreras; constituye, asimismo, un poderoso estímulo para que los países más rezagados mejoren su legislación social y tiende, finalmente, a estabilizar las conquistas logradas por los trabajadores y a hacerlas prácticamente efectivas.

En esta hora crítica de la economía mundial, es deber imperioso de los gobiernos demostrar en forma indudable y positiva su espíritu de cooperación internacional para el establecimiento de una mayor justicia social, facilitando el advenimiento — claramente anunciado ya — de nuevas formas sociales e internacionales.

La Confederación General del Trabajo vería con agrado que la Comisión de Negocios Extranjeros y Culto de la Cámara de Diputados de la Nación formulara nuevos despachos recomendando la aprobación de los diecisiete convenios del trabajo que fueron sometidos a su consideración, a fin de que en el curso de las presentes sesiones ordinarias el Congreso de la Nación tenga la posibilidad de pronunciarse a su respecto.

Al solicitarlo así, la Confederación General del Trabajo, al par que se hace eco de los justos anhelos de la clase trabajadora organizada del país, vela por que éste actúe en el plano internacional con la seriedad y eficiencia y que su desenvolvimiento económico y social le imponen.

Salúdalo con la mayor consideración.

Por la Confederación General del Trabajo

Luis Cerutti,
Secretario general.

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO RUGGIERI

La opinión del juez de comercio doctor Fernando Cermesoni

*Todo empleado debe estar comprendido
en la ley*

Son plausibles, por cierto, y llenan una verdadera laguna en nuestra legislación — comenzó diciendo el doctor Cermesoni — las reformas que se proponen en el Congreso, extendiendo los beneficios del artículo 157 del Código Mercantil, a todos los empleados de comercio, con el propósito de dar mayor amplitud a tal imperativo exegético, incluyendo así a los obreros permanentes de la industria y demás empleados, cualquiera sea su carácter y ya tengan o no relación con el público.

Con ello habrán terminado las discusiones judiciales con respecto al mes de sobresueldo, sin que sea dado a los patrones alegar que el

empleado no reviste el carácter de tal, a los efectos de beneficiarse con el mes de sobresueldo que dispone el mencionado artículo.

Era evidente la injusticia que contenía el artículo 157 del Código de Comercio, excluyendo de los beneficios del mes de sobresueldo a la gran mayoría del personal de un establecimiento mercantil.

La ley debe ser amplia en sus efectos, porque lógicamente no puede admitirse distinguos, otorgando los beneficios al empleado y negándole en igualdad de condiciones a los demás que por una ficción no se les considera tales.

Todo lo que signifique favorecer las condiciones de las clases más necesitadas de la sociedad, sin afectar los grandes principios incorporados por la legislación y sin desmedro del capital, deben merecer especial atención por parte del legislador.

También deben estar amparados por accidentes del trabajo

Si bien las reformas proyectadas constituyen una verdadera necesidad, no lo es menos la actual situación de desventaja en que se encuentra el empleado frente a los accidentes del trabajo. La ley 9.688, sólo ampara al obrero, propiamente dicho, quedando huérfano de toda protección el empleado que en la generalidad de los casos sufre igualmente accidentes por la índole de las obligaciones que tiene encomendadas. Es, a mi juicio — nos dijo — de imperiosa necesidad ampliar igualmente los beneficios de la ley de accidentes del trabajo, extendiéndolos a todo empleado de comercio.

Es también justiciero el proyecto en cuanto establece mayor indemnización, en proporción a la antigüedad del empleado.

Período de vacaciones

Debe convenirse que todo empleado es acreedor al descanso y en período de vacaciones, porque no es dado admitir una vida de constante trabajo sin concebir siquiera una licencia para reparar las energías que necesita todo ser humano. Todas estas reformas del proyecto, constituyen reparaciones de injusticias contenidas en legislaciones anticuadas, tratando de elevar su nivel social, estimulando al empleado que cumple con sus obligaciones, lo que se traducirá en verdaderos beneficios para los mismos patrones que verán acrecentar el esfuerzo de quienes cooperan en el éxito de sus empresas.

Derecho preferente debe tener el sueldo del empleado y del obrero

Existen en esta materia — nos expresa el magistrado — otras reformas de suma necesidad, tales como las que se relacionan con el privilegio del empleado y del obrero.

En los juicios de quiebra generalmente, los empleados y los obreros quedan sin percibir sus sueldos, porque existen varios acreedores preferentes en la ley de quiebra, que deben ser pagados en primer término, como ser el locador, etcétera.

Debe modificarse el criterio anticuado en la graduación de los créditos, colocando a los sueldos con derecho preferente, o por lo menos con el mismo privilegio que gozan los demás acreedores privilegiados a los efectos del prorrateo, debiendo tener presente que generalmente el

locador recurre a la fianza para garantizar su contrato, lo que no es dado efectuar al empleado u obrero que por la quiebra de la empresa se encuentra abocado a una situación difícil, por cuanto no podrá hacer efectivo su legítimo derecho, que siempre es de imperiosa necesidad.

Los beneficios deben ser irrenunciabiles

A juicio del doctor Cermesoni, es de capital importancia que en las modificaciones proyectadas se establezca la nulidad de toda convención subscripta de antemano, entre el patrón y el empleado, que trate de dejar sin efecto los beneficios que acuerda la ley.

Tales convenios, como se comprenderá, no son el resultado de las voluntades libres, sino la imposición por una parte, acatada por la más débil. Debe, pues, la ley, fulminar con la nulidad, todo arreglo que directa o indirectamente trate de burlar sus disposiciones.

Me sugiere esta disposición expresa, nos dice, la jurisprudencia de nuestros tribunales, que han sustentado que tales convenios no son nulos, y, en consecuencia, deben ser respetados y ser tenidos como valor jurídico.

La jurisprudencia extranjera, en cambio, interpretando disposiciones análogas a nuestro artículo 157, ha declarado nulos tales «arreglos», porque es evidente que el empleado que necesita ocupación, se ve obligado a subscribir la renuncia que le impone previamente el patrón, y ello, humanamente, no deber ser admitido.

El principio de la revisión de los códigos

Por último, nos manifestó el doctor Cermesoni que los principios de la legislación deben modificarse con el andar del tiempo. Existen códigos que han incorporado el principio de la revisión, después del transcurso de cierto tiempo, y ello ha dado en los países que se aplica, el mejor resultado.

La vida moderna requiere un nivel superior de justicia para mantener la armonía de los derechos, que es el mejor procedimiento de conservación de los actuales moldes de la civilización.

Modificar con método y sin lesionar derechos; reformar paulatinamente la legislación, de acuerdo con las necesidades, respetando el estado de cosas existente, significa hacer patria, porque con ello se hace progreso.